



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SENTENCIA DEFINITIVA

Aguascalientes, Aguascalientes, **treinta y uno de enero de dos mil veintitrés**

V I S T O S, los autos para resolver el expediente **0216/2019** relativo al Juicio Único Civil de **Pérdida de Patria Potestad, Guarda y Custodia**, promovido por ***** , en contra de *****; y

CONSIDERANDO

I. Competencia.

Esta autoridad es competente para conocer del presente juicio, de acuerdo con el artículo 142 fracción XIII del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes¹, pues se trata del ejercicio de una acción personal y el demandado tiene su domicilio en esta ciudad de Aguascalientes.

Además, se sostiene competencia por razón de materia, cuantía, grado y turno conforme a los artículos 1, 2, 35 y 40 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado².

¹ **Artículo 142.** Es juez competente:

(...)

XIII.- Para decidir sobre la pérdida de la patria potestad, el Juez del domicilio que habite el menor de edad o incapaz de que se trate.

² **Artículo 1.** El Poder Judicial del Estado se integra por el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Juzgados de Primera Instancia, Civiles y Penales, Mixtos de Primera Instancia, Familiares y Mixtos Menores, el Consejo de la Judicatura estatal, el Instituto de Capacitación y la Contraloría Interna.

Artículo 2. El Supremo tribunal de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los Jueces ejercerán su jurisdicción respectiva en el lugar, grado y términos que les asigna esta Ley, los Códigos Procesales, la Ley electoral del Estado, la Ley del Procedimiento Administrativo y demás leyes vigentes.

Artículo 35. Habrá en el Estado los partidos judiciales que sean necesarios para la pronta administración de justicia que apruebe el Consejo de la Judicatura de conformidad con su disponibilidad presupuestal, el cual determinará la competencia territorial y, en su caso, la especialización por materia de los juzgados.

Artículo 40. Los Juzgados de lo Familiar son competentes para conocer de los siguientes negocios:

(...)

X.- Excusa de pérdida de la patria potestad y de la emancipación;

...

II. Análisis de la vía.

La vía única civil resulta ser procedente, ya que, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, no establece una tramitación especial para los juicios de esta naturaleza.

III. Principio de congruencia de las resoluciones.

El artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, refiere:

“Artículo 82.- Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Quando el juicio se siga en rebeldía, deberán verificar de oficio, la existencia de los elementos para la procedencia de la acción.”.

IV. Fijación de la litis.

***** demandó la pérdida de la patria potestad que detenta ***** respecto de la niña *****, bajo el argumento de que su hija ***** (finada), en el mes de noviembre de dos mil nueve, inició una relación de concubinato con el señor *****, producto de la cual procrearon una hija de nombre *****, que la relación entre ellos fue muy corta y cuando se separaron, su hija ***** (finada) y su nieta *****, regresaron a habitar el domicilio de la actora.

Aduce que desde la separación de su hija con el demandado, éste no se ha hecho cargo de su hija *****, ni



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

económicamente ni moralmente, puesto que nunca convive con ella y en cuanto a los alimentos, fue su finada hija quien siempre se hizo cargo de cubrirlos, e incluso presentó una demanda de alimentos la cual se tramitó bajo el expediente número ***** del índice de este Juzgado Primero Familiar.

Señala que el *****, su hija ***** (finada) sufrió un accidente en su trabajo, en el que lamentablemente perdió la vida, por lo que, para realizar diversos trámites legales, es necesario que sea ella quien cuenta con la guarda y custodia de su nieta, pues la niña está acostumbrada a vivir con ella, que es ella quien la cuidaba cuando su mamá tenía que ir a trabajar y es su deseo hacerse cargo de las necesidades que conllevan la guarda y custodia de su nieta, pues el demandado ha ejercido maltrato sobre la niña *****, por tantas omisiones de cuidado y por el temor que tiene por la vida y seguridad de su nieta, es que promueve el presente juicio.

Emplazado que fue *****, dio contestación a la demanda (foja 81 a 89), oponiéndose a las prestaciones que le son reclamadas por su contraria, aduciendo que la actora tiene antecedentes penales en la hoy Ciudad de México, siendo esa una de las razones por las que se encuentra radicando en esta Ciudad; señala que aún después de la ruptura con la madre de su hija, continuaron teniendo contacto, habiendo llegado a un acuerdo en el

que ella tendría la custodia de hecho de su hija y él podría convivir con la niña tres veces por semana, siendo que él acudía por su hija, iba a la escuela por ella y estaba presente en sus festivales escolares, todo ello derivado de la relación de cordialidad que había entre la madre de su hija y él, que él siempre ha cumplido con sus obligaciones alimentarias para con su hija, que es falso que se le haya demandado por parte de la madre de su hija, que lo único que pretende la abuela de su hija es obtener un lucro, ya que la madre de su hija era ******, por lo que contaba con un seguro de vida, el cual era precisamente para su hija, siendo que la actora no ha podido cobrar ese seguro, dado que ella no tiene la custodia ni la patria potestad de su hija, por tanto la abuela materna ha privado a su nieta de convivir con su padre, dado que tiene el derecho moral de ejercer la patria potestad y la custodia legal de su hija, sin embargo la actora tiene el interés de obtener un beneficio económico para obtener un documento que le permita acceder al citado seguro de vida, siendo esa la verdadera razón que tiene para llevar el procedimiento que plantea.

Aduce que es a él a quien le corresponde el ejercicio de la patria potestad y por consiguiente la custodia de su hija, ya que por Ley, es él quien debe de ejercer tal derecho y obligación y no la abuela materna.

Señala que la abuela materna no es un un ejemplo de virtudes, pues se hace notar que fue madre de tres hijos, una de



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

ellas, la madre de su hija ***** (finada), otro de ellos de nombre *****, quien cuenta con aproximadamente con veintiocho años de edad y es una persona con capacidades diferentes, ya que tiene disfunciones psicomotrices, quien está abandonado en Ciudad de México, ya que su madre (actora en este juicio), no lo ha querido apoyar de forma alguna; y el tercer hijo de la actora de nombre *****, falleció en el año dos mil dieciséis, como consecuencia de que se ahorcó en su domicilio, que es el mismo en el que vive la actora, de lo que se puede observar que la actora no ha sido buena madre, por lo que él tiene el temor de que la actora no sea un buen ejemplo para su hija ***** y que contrario a ello la lleve por mal camino, por lo que intentó que la abuela materna le entregara a su hija, a fin de que él pudiera ejercer el derecho de custodia que tiene, sin embargo la actora de manera inmediata le impidió el acceso a su hija, le negó a tener contacto con ella y lo amenazó, haciéndole saber que no podía acercarse a su hija, ya que tenían que hacer los trámites para cobrar el seguro o de lo contrario, atentarían contra su persona, a lo que él le informó que por él no había problema, que si su interés era el seguro, que se podían quedar con él, que a él lo único que le interesaba era su menor hija, por lo que interpuso una denuncia el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a la cual le correspondió la carpeta de investigación *****, que en la

Fiscalía Especializada en Justicia Familiar y de Género, le informaron que no debía acercarse al domicilio de la persona a quien había denunciado para que no hubiera algún señalamiento en su contra, por lo que ha seguido tales instrucciones, en espera de que se haga justicia y se aplique la Ley, siendo él quien teme por la vida e integridad de su hija, pues por las costumbres, el grado de educación y la forma de ser de la abuela materna, quien es una persona agresiva y posesiva, es que teme que se pueda afectar a su hija de alguna forma, como ha sucedido con sus otros hijos.

Se precisa que el demandado opuso como excepciones: 1.- falta de acción y derecho; 2.- Plus Petitio.

V. Valoración de pruebas.

El artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone que corresponde al actor justificar los hechos constitutivos de su acción, y al demandado sus excepciones y defensas.

Así, ***** adjuntó a su escrito inicial de demanda los siguientes documentos:

La **documental** consistente en la copia simple de la identificación de la parte actora, visible a foja seis de autos, y a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 346 bis y 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber manifestado la actora bajo protesta de decir verdad que coincide con la original, con la cual se demuestra que



fue expedida a nombre de ***** , y sólo justifica o acredita su identidad.

La **documental** consistente en la copia simple de la identificación de ***** (finada), visible a foja siete de autos, mismas que carece de valor probatorio en términos de los artículos 346 bis y 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a una copia simple, cuyo contenido no se encuentra robustecido con diversos medios de prueba que le otorguen certeza³.

La **documental** consistente en los atestados del Registro Civil, visibles a fojas ocho a nueve de autos, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones, con los cuales se justifica que:

- En ***** , nació en Pachuca de Soto Hidalgo, ***** , siendo hija de ***** y ***** .

-En ***** , nació en esta Ciudad de Aguascalientes, la niña ***** , siendo hija de

³ Es aplicable al caso la tesis: I.3o.C. J/37, jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la novena época, materia civil, consultable bajo el registro digital: 172557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, en la que se señala: **COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.** Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.

***** y *****, contando actualmente con doce años.

La **documental** consistente en el atestado del Registro Civil visible a foja diez de autos, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se justifica que en *****, falleció en esta Ciudad de Aguascalientes *****, quien fue hija de ***** y *****.

Adicionalmente, en auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 126, le fueron admitidos los siguientes medios de convicción:

La **confesional**, a cargo de *****, desahogada en audiencia celebrada en catorce de diciembre de dos mil diecinueve (foja 286 a 289), la cual tiene valor probatorio en términos de los artículos 339 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues ante la inasistencia injustificada del absolvente, fue declarado confeso, sin que se hubiese ofertado prueba en contrario, tendiente a desvirtuar dicha declaración.

Con ello, se tuvo a ***** aceptando como cierto que conoce a ***** porque es abuela de su hija, que reconoció como su hija a la niña *****, que cuando estuvo en concubinato con ***** (finada), madre de su hija,



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

vivió en casa de ***** , que abandonó el domicilio en que habitaba con su hija ***** y la madre de esta, ***** , que desde que abandonó a su hija se ha abstenido de darle pensión alimenticia, que no se ha ocupado del cuidado, salud o educación de su hija ***** , que cuenta con un salario remunerado, que cuenta con una entrada de dinero extra como ***** , que reconoce su obligación de dar alimentos a su hija ***** , que ha incumplido con su obligación de proporcionar alimentos a su hija ***** a pesar de haberla reconocido legalmente, y de que siempre tuvo posibilidades de dar pensión alimenticia para su hija.

La **documental en vía de informe** misma que fue rendida por el ***** , de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por una institución educativa privada, incorporada al Instituto de Educación de Aguascalientes, y encontrarse impresa en papel membretado, con la cual se justifica que al dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (fecha en que se expidió el referido informe), la niña ***** se encontraba inscrita en el cuarto grado de primaria en dicha institución, que la persona que se encargó del pago de colegiaturas, llevar y recoger a la niña, asistir a las juntas de padres de familia, festivales, acudir en caso de enfermedad o cualquier eventualidad de la niña, fue la señora

***** (finada), hasta el día de su fallecimiento, y en su defecto, la señora ***** y a partir del fallecimiento de la madre de la niña, ha sido la señora ***** quien se encargaba de las necesidades educativas de la niña *****

La **testimonial**, consistente en el dicho de ***** , ***** y ***** , desahogada en audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, que merece valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, considerado que las testigos fueron claras, concisas, se pronunciaron sin dudas ni reticencia sobre la sustancia de los hechos controvertidos, mismos que refirieron conocer por sí mismas, y no, por inducciones de terceras personas.

Con ello se tuvo por acreditado que ***** (finada) y ***** tuvieron una niña, de nombre ***** , que es ***** quien se hace cargo de cubrir las necesidades alimenticias de la niña, pues vive con ella, que es la actora quien se encarga de llevar a la niña al colegio, la cuida, la lleva al médico cuando se enferma, que se hace cargo de todos los gastos de la niña, que ***** no aporta cantidad alguna para cubrir las necesidades alimenticias de su hija, pues incluso ***** presentó una demanda por alimentos en su contra, que ***** no convive con su hija, que en ese momento ***** trabajaba en



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

***** , que en ocasiones ***** llegó a manifestar que en caso de que ella falleciera, le gustaría que su madre, actora de este juicio, quedara al cuidado de su hija.

La **documental** consistente en una constancia de estudios expedida por el ***** visible a foja ciento once, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por una institución educativa privada, incorporada al Instituto de Educación de Aguascalientes, encontrarse impresa en hoja membretada y contar con sello del instituto referido, con la cual se justifica que al cuatro de abril de dos mil diecinueve (fecha de expedición de dicho documento), la niña ***** se encontraba inscrita en el tercer grado de primaria, durante el ciclo escolar 2018-2019, que se encuentra inscrita en dicha institución desde los cinco años de edad, desde el ciclo escolar 2015-2016, que los montos de las colegiaturas hasta el mes de febrero de dos mil diecinueve, se descontaban vía nómina a ***** , siendo los siguientes:

Ciclo Escolar	Monto Colegiatura (mensual)
2015-2016	\$ 1,040.00
2016-2017	1,040.00
2017-2018	1,120.00
2018-2019	1,240.00

La **documental** consistente en la copia simple del reporte de altas de crédito vía nómina visible a fojas ciento doce y ciento trece

de autos, misma que merece valor probatorio en términos de los artículos 285, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a copias simples de documentos privados provenientes de terceros, cuyo contenido se encuentra robustecido con diversos medios de prueba que les otorguen certeza ⁴, específicamente con la constancia emitida por el ***** , visible a foja ciento once de autos; así con dicho documento se justifica que se solicitó a la ***** , se realizara el descuento del pago de las colegiaturas de la niña *****

La **documental**, consistente en la copia simple del reporte de evaluación del ciclo escolar 2015-2016 de la infante ***** , visible a foja ciento catorce de autos, de valor probatorio en términos de los artículos 285, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a una copia simple de un documento público, cuyo contenido no se encuentra robustecido con diversos medios de prueba que le otorgan certeza ⁵,

⁴ Es aplicable al caso la tesis: I.3o.C. J/37, jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la novena época, materia civil, consultable bajo el registro digital: 172557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, en la que se señala: **COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.** Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.

⁵ Es aplicable al caso la tesis: I.3o.C. J/37, jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la novena época, materia civil, consultable bajo el registro digital: 172557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, en la que se señala: **COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.** Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que



específicamente con la constancia emitida por el ***** , visible a foja ciento diez de autos; así, con la documental que se valora se tiene por justificado que en el ciclo escolar 2015-2016, la niña ***** cursó y concluyó satisfactoriamente la educación preescolar en el ***** .

La **documental** consistente en el informe de calificaciones del ciclo escolar 2018-2019 de la niña ***** , visible a foja ciento quince de autos, de valor probatorio en términos de los artículos 285, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a una copia simple de un documento público, cuyo contenido no se encuentra robustecido con diversos medios de prueba que le otorgan certeza⁶, específicamente con la constancia emitida por el ***** , visible a foja ciento diez de autos; así, con la documental que se valora se tiene por justificado que en el ciclo escolar 2018-2019, la niña ***** se encontraba cursando el tercer grado de educación primaria en el ***** , así como las calificaciones obtenidas en el primero y segundo periodo de evaluación.

obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.

⁶ Es aplicable al caso la tesis: I.3o.C. J/37, jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la novena época, materia civil, consultable bajo el registro digital: 172557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, en la que se señala: **COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.** Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.

La **documental** consistente en **cinco** recibos de pago con folio 10101, 10083, 10142, 09682 y 09972 expedidos por el ***** , visibles a fojas ciento dieciséis y ciento diecisiete, de valor probatorio en términos de los artículos 285 y 346 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a documentos privados provenientes de terceros, cuyo contenido se encuentra robustecido con diversos medios de prueba que le otorgan certeza, específicamente con la constancia expedida por el ***** , visible a foja ciento diez; así, con los documentos que se valoran, se tiene por justificado que en dos de abril, dos de julio, veintiséis y veintinueve de julio y dos de agosto, todos de dos mil diecinueve, se realizó la compra de diversos artículos escolares para la niña ***** , sin que los mismos tengan el alcance de demostrar qué persona realizó tales erogaciones.

La **documental**, consistente en una receta médica expedida por el Consultorio Médico La Esperanza, visible a foja ciento veinte, misma que carece de valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 285 y 346 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a un documento privado proveniente de terceros, cuyo contenido no se encuentra robustecido con diverso medio de prueba que le otorguen certeza.

La **documental** consistente en siete notas de venta, visibles a fojas ciento diecisiete a ciento diecinueve de autos, las cuales que carecen de valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los



artículos 234, 285, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a documentos privados provenientes de terceros, cuyo contenido no se encuentra robustecido con diversos medios de prueba que les otorgue certeza, aunado a que de los mismos no se desprende dato alguno que los vincule con las partes del presente juicio, además de que los visibles a fojas ciento diecisiete (esquina inferior izquierda) y ciento dieciocho (izquierda), se encuentran ilegibles, y al no advertirse su contenido no pueden ser objeto de valoración por esta autoridad⁷.

La **presuncional**, e **instrumental de actuaciones**, mismas que fueron desahogadas conforme a su especial naturaleza, en audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 167), que merecen valor probatorio conforme lo dispuesto en los artículos 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, persistiendo la presunción de la necesidad de los alimentos a favor de la infante *****

De igual manera, fueron admitidos al demandado ***** los siguientes medios de convicción:

La **confesional**, a cargo ***** , probanza que no beneficia a los intereses de su oferente, toda vez que en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve (foja 286),

⁷ Así consta en la tesis jurisprudencial emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tocante a la Octava Época, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de mil novecientos noventa y uno, página cuarenta y nueve, que dispone: DOCUMENTOS ILEGIBLES. CARECEN DE VALOR PROBATORIO. Con fundamento en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, debe negarse valor probatorio a los documentos ilegibles, en virtud de que el juzgador está imposibilitado para examinar su contenido.

se declaró que ésta probanza ya no sería desahogada en esta instancia por causa imputable al mismo.

La **documental**, consistente en el atestado por el registro civil relativo al nacimiento de *****, visible a foja ocho de autos, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se justifica que en *****, nació en esta Ciudad de Aguascalientes, la niña *****, siendo hija de ***** y *****, contando actualmente con doce años.

La **documental en vía de informe** consistente en el que rindió la **Fiscalía General del Estado**, visible a foja ciento ochenta y tres, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se justifica que en los archivos con los que cuenta dicha dependencia, se encontró la carpeta de investigación número *****, iniciada en contra de ***** por hechos presuntivamente constitutivos del delito de sustracción de menores, siendo el ofendido *****.

-Asimismo se justifica que no se encontró información relativa a la muerte de alguna persona de *****.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

La **documental**, consistente en la copia simple de la carátula de la carpeta de investigación ***** visible a foja noventa y uno, misma que merece valor probatorio en términos de los artículos 285 y 351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al referirse a una copia simple de un documento público, cuyo contenido se encuentra robustecido con diversos medios de prueba que le otorgan certeza⁸, específicamente con el informe rendido por la **Fiscalía General del Estado** valorado en el párrafo precedente, con la cual se justifica que en diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, ***** interpuso denuncia en contra de *****, aduciendo que la mamá de su hija falleció el ***** y la señora *****, abuela materna de la niña, tiene a su hija y no le permite verla, la cual se registro bajo el número de carpeta de investigación número *****.

La **documental en vía de informe** consistente en aquel que rindió la **Dirección de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes**, visible a fojas doscientos noventa a doscientos noventa y uno, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber

⁸ Es aplicable al caso la tesis: I.3o.C. J/37, jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la novena época, materia civil, consultable bajo el registro digital: 172557, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1759, en la que se señala: **COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.** Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.

sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, el cual se justifica que ***** (finada) fue elementó activo de la ***** de Aguascalientes, que falleció en cumplimiento a su deber en ***** , que sí contaba con un seguro de vida al momento de su fallecimiento.

La **documental en vía de informe** consistente en aquel que fue emitido por el **Director de Justicia Municipal de Aguascalientes**, mismo que es visible a fojas doscientos nueve a doscientos diez, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se justifica que no se encontró registro de detención alguno a nombre de *****.

-Que a nombre de ***** se encontró registro de ocho detenciones, por faltas administrativas.

La **testimonial**, consistente en el dicho de ***** , ***** y ***** , prueba que no le beneficia a su oferente en la presente resolución, dado que en audiencia de cinco de febrero de dos mil veinte (foja 304), se declaró desierta la prueba en mención, en relación a los dos últimos de los atestes, mientras que, respecto de la primera de ellas, la parte oferente se desistió de



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

su dicho en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (foja 357).

La **presuncional, e instrumental de actuaciones**, desahogadas conforme a su especial naturaleza, en audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 167), sin embargo, de lo actuado no se advierte presunción alguna que le favorezca en términos de los artículos 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Adicionalmente, esta autoridad en uso de sus facultades para intervenir de oficio y realizar las diligencias necesarias para el conocimiento de la verdad a que se refieren los artículos 4 y 133 Constitucional, 1, 3, 5, 9 de la Convención de los Derechos del Niño, 2, 3, 6 y 18 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, y 186 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, ordenó recabar los siguientes medios de convicción:

La **opinión técnica en materia de trabajo social**, a cargo del **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado**, visible a fojas doscientos dieciocho a doscientos cuarenta y cinco, de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, realizada por la licenciada **Carolina Palos Aguilar** trabajadora social adscrita a la Procuraduría de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante visitas directas en el

domicilio de la niña *****, así como del demandado ***** el cual merece valor en términos de los artículos 294, 297, 300 y 347 del Código Procesal Civil, considerando la calidad académica de la perito, los conocimientos prácticos con que cuenta en materia de trabajo social, sin soslayar los elementos que ponderaron y los procedimientos científicos y analíticos que efectuó que le permitieron arribar a las conclusiones plasmadas en sus dictámenes.

a) Así, de la visita directa en el domicilio de la niña *****, se obtuvo que vive en el domicilio ubicado en *****
*****, en compañía de su abuela materna *****
inmueble que es propiedad de la actora, se encuentra ubicado al ***** de la Ciudad en una zona urbana, cuenta con todos los servicios públicos como lo es agua, luz, drenaje, alumbrado público, vigilancia policiaca, recolección de basura, así como acceso al transporte público, se distribuye en una planta, construida en block, enjarrado, pintado en paredes, en buenas condiciones, el techo es de losa y cuenta con vitropiso, dos recámaras, una cocina, un baño, sala comedor, patio y cochera para un vehículo, pero la cochera se ocupa para comercio y solo se ocupa una recámara, ya que la niña no quiere dormir en el cuarto que era de su madre, los espacios e higiene se observaron en



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

buenas condiciones, además de contar con el mobiliario indispensable para cubrir sus necesidades.

En cuanto a la dinámica familiar, se refiere que la señora ***** es la jefa de familia, que por el momento se encuentra solamente en compañía de su nieta, existe una buena relación entre ella y su nieta, que son muy unidas y ha confianza y cariño entre ellas, que s nieta está muy apegada a ella, pues toda la vida la ha criado, señala que es ella quien cubre todas las necesidades de su nieta con su trabajo.

En el momento de realizarse la visita por parte de la trabajadora social, la niña ***** se encontraba inscrita en el ***** , con un horario de las ocho a las catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes, que para trasladarse se utilizaba el taxi como medio de transporte por las mañanas y en la tarde el transporte urbano.

Se indica que ***** , trabajaba en ese momento como empleada para el ***** **, en donde proporciona apoyos como cuartos adicionales o calentadores solares, teniendo un horario de las ocho a las quince horas con treinta minutos, de lunes a viernes, que las oficinas están en la zona centro y obteniendo ingresos por la suma aproximada de diez mil pesos por mes; que además los fines de semana en su

casa es ***** , el cual atiende de lunes a viernes de las diecinueve a las veintiuna horas y le genera un ingreso de cuatro mil ochocientos pesos mensuales, que cuando su nieta sale de la escuela, le dan permiso en su trabajo para ir a recogerla y la niña se queda en las oficinas hasta que termina su jornada laboral, por lo que no descuida a su nieta en ningún momento.

La peritada refirió contar con el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a su nieta su madre la tenía asegurada ante dicho instituto, más no se tenía conocimiento de si aún cuente con dicho servicio, dado el fallecimiento de su madre, que en caso de requerir atención médica, acuden a los consultorios de Farmacias Similares.

Referente a las necesidades de la niña ***** las mismas se estimaron en la suma de cinco mil trescientos setenta y cinco pesos, por concepto de alimentación, pago de vivienda, servicios, educación, vestido, transporte, recreación, servicio médico, sistema de cable y despensa.

En relación a la economía familiar, se indica que los ingresos mensuales de la señora ***** en ese momento, ascendían a la cantidad de dieciséis mil trescientos pesos, mientras que los egresos se estimaron en la cantidad de once mil ochocientos cincuenta pesos, para satisfacer las necesidades de ambas integrantes de la familia, por lo que la perito



consideró que la familia es de un nivel medio, en donde se observa que los ingresos son cubiertos por parte de la actora de este juicio, pues cuenta con un trabajo fijo y estable, tiene buena solvencia económica la cual es suficiente para cubrir las necesidades tanto de su nieta como las propias.

De las visitas colaterales se obtuvo que la señora ***** es buena persona, vive solo con su nieta y atiende bien a la niña, la trae limpia, la lleva a la escuela y salen juntas.

Habiendo concluido la perito que la vivienda en que reside la niña ***** se consideran como buenas, es una vivienda con una buena construcción, cuenta con todos los servicios básicos y mobiliario indispensable para cubrir las necesidades de la actora y su nieta, que es ***** quien atiende en todos los sentidos a su nieta y se organiza para cumplir con todo lo que requiere la niña.

b) Respecto de la visita realizada en el domicilio de ***** , en veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se obtuvo que:

- Habitaba en el domicilio ubicado en ***** , en compañía de su pareja sentimental ***** y su hija ***** ,

vivienda que rentaba, siendo una casa individual que se distribuye en una planta, construida en block, enjarrado y pintado en paredes, techo de concreto, tiene vitropiso y uno de los cuartos alfombra, cuenta con tres recámaras, una cocina, un baño, sala comedor, pario y cochera para un vehículo, cuenta con el mobiliario indispensable para cubrir sus necesidades y se encuentra en buen estado. Asimismo la vivienda cuenta con todos los servicios públicos, como lo es alumbrado, agua potable, drenaje, luz eléctrica, vigilancia policiaca y recolección de basura, así como acceso al servicio de transporte público.

Las condiciones de la vivienda se encontraron de regulares a buenas, pues en el momento de la visita, el peritado se encontraba realizando las labores domésticas.

En cuanto a la dinámica familiar, el peritado indicó que él es el jefe de familia, pero entre éste y su pareja tratan de compartir las responsabilidades para que todo sea equitativo, ambos realizan labores del hogar y ambos aportan para cubrir los gastos de la familia y los servicios de la vivienda, que tienen una buena relación de pareja en la que hay confianza y comunicación, que su pareja está de acuerdo con apoyarlo en caso de que logre obtener la custodia de su hija *****, indica que sí han convivido y se la llevan bien.

Respecto a la ocupación, el señor *****, en ese momento se dedicaba a realizar *****,



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

es un trabajo fijo en donde le dedica alrededor de cinco horas, no tiene horario fijo, trabaja de lunes a viernes, en donde él se encarga de ***** , teniendo un ingreso variable de aproximadamente dos mil quinientos pesos por semana; de igual manera refirió que se encontraba realizando pruebas físicas para obtener un lugar en algún ***** , de en donde obtenía ingresos por parte de patrocinadores de dos mil quinientos por mes, para cubrir los gastos de transportes, hotel y lo que requiere y por otra parte lo que ocupa para cubrir los gastos de su familia.

Además la señora ***** , pareja del peritado, también laboraba en ***** , en un horario comprendido de las siete a las quince horas, obteniendo ingresos de cinco mil pesos por mes, y se encontraba estudiando la ***** los días sábado de las ocho a las catorce horas, que la colegiatura ascendía a mil trescientos pesos mensuales, pero contaba con beca por la cantidad de dos mil pesos por mes, y que cuando su pareja estudiaba, el peritado era el encargado de cuidar y atender a su hija *****

El peritado refirió que tanto él como su familia, contaban con el servicio médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la familia se considera aparentemente sana y no con enfermizos, indicó que él no consume ningún tipo de drogas ni

antidepresivos, que solo toma alcohol de manera eventual en reuniones sociales.

En cuanto a la economía familiar, se indica que los ingresos de la familia ascienden a la cantidad de dieciocho mil setecientos pesos mensuales, mientras que sus egresos para satisfacer todas las necesidades de los miembros de la familia, era por la suma de dieciséis mil ciento cuarenta pesos mensuales, por lo que se consideró que la familia pertenece a un nivel medio, pues sus ingresos van acorde a sus egresos.

Por lo anterior, la perito concluyó que las condiciones de vida del señor ***** se consideraban como buenas en cuanto a la construcción de la vivienda, contando con el equipamiento y servicios necesarios para cubrir las necesidades de sus integrantes.

El peritado refirió tener la intención de obtener la custodia de su hija *****, pero la señora ***** no le permitía tener acercamiento con ella, desde que falleció la señora *****, estando consciente de que su hija sí se ha criado básicamente con su abuela materna, pero él como padre también tiene la necesidad de estar con ella y tiene toda la intención de cuidarla y brindarle buena calidad de vida, contando en ese entonces, con el apoyo de su pareja.

La **pericial en materia de psicología**, emitida por la licenciada **Wendy Esparza Resendiz Macías**, psicóloga adscrita a



la Unidad de Psicología de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, visible a fojas trescientos sesenta y nueve a trescientos ochenta y de la cuatrocientos veintitrés a la cuatrocientos veintisiete; respecto de los litigantes y de la niña ***** , opinión a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 300 y 347 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, dado que, la especialista refiere los estudios realizados, los conocimientos practicados que tienen relación a la materia objeto de la prueba, los elementos y procedimientos efectuados que permiten dar respuesta a la cuestión planteada y los motivos y razones que sustentó sus conclusiones.

a) Respecto de *****

-Se indica que la peritada se encontró ubicada en espacio, tiempo y persona, su estado mental es acorde a su edad cronológica, se presentó en tiempo y forma a la cita programada, en adecuadas condiciones de aseo e higiene personal, se mostró tranquila, fue congruente, siendo clara y fluida al responder.

-Proyecta un alto nivel de aspiraciones, esfuerzo por alcanzar metas, buen nivel de energía, tendencia a lo intelectual, optimismo, alegría, euforia, modestia, sencillez, timidez, tendencia la concentración, a la observación y al análisis, se detectó

sensibilidad, delicadeza, distinción, dominio de sí, elegancia, idealismo, sensibilidad.

-Se identificó un lazo afectivo importante con su nieta ***** , ya que su lenguaje verbal y corporal eran congruentes y de total aceptación para la niña, describió aquellas actividades que suelen realizar juntas, mostró interés por su desarrollo académico y cognitivo.

-No se encontraron factores de riesgo en su estilo de crianza, practica el dialogo activo y la validación de sentimientos involucrándose en todas las áreas de la vida de la niña, siendo una figura presente y relevante en su vida, establece límites y reglas, conoce la etapa de desarrollo de su nieta, aportándole lo necesario para su sano desarrollo.

-Cuenta con las habilidades de crianza necesarias, además de que su emocionalidad es estable.

b) En relación al señor *****

El señor ***** se encontró ubicado en persona, sin embargo en tiempo y espacio tuvo dificultad en referir fechas o lapsos de tiempo, observando dificultad incluso para mencionar su fecha de nacimiento, asimismo se pudo observar afectación emocional sobre el duelo de la muerte de su madre en el años dos mil trece, pues se evidenció que dicha pérdida le trajo inestabilidad general hasta la fecha en su vida; se presentó al día siguiente de la fecha y hora programada que se le asignó, al hacerle



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

la aclaración dejó ver que no tenía noción del día en que se encontraba, no mantenía contacto visual, constantemente lo evitaba, manteniendo su mirada baja, su lenguaje verbal y no verbal no fueron congruentes.

-Proyectó sentimientos de ansiedad, temor de que los impulsos que rodean libremente en la fantasía comiencen a aparecer en las conductas manifiestas o a distorsionar la percepción de la realidad, refleja decepción, deseo de afectividad, sentimientos de apatía, ausencia de comunicación en el seno familiar, carencias afectivas, apegado a las normas sociales, busca tener una guía establecida para desenvolverse, sujeto concreto con necesidad de apoyo, puede tener dificultades de aprendizaje, nivel medio de inteligencia, persona rudimentaria, sentimientos de irregularidad, desarraigo, inseguridad, baja autoestima.

- Se observó incongruencia en su lenguaje verbal y no verbal, ya que refería que lo más importante era convivir con su hija, sin embargo, no ha cumplido con lo que le piden, dándose por vencido desde el principio al mencionar que sabe que la abuela de la niña no le permite el contacto con ésta y que prefiere evitarse malos ratos e incomodidades.

-Se identificó un duelo no resuelto del año dos mil trece, el cual ha provocado inestabilidad en diferentes áreas de su vida, ya que hasta la fecha de valoración, no tenía un trabajo estable, sus

ingresos son variables y su entorno familiar aunque él refiere que es un buen ambiente, cuando describe la dinámica familiar, evidencia lazos afectivos débiles entre los integrantes y poca convivencia.

-El peritado manifestó que fue alcohólico y drogadicto desde el dos mil trece al dos mil quince, negó que actualmente siguiera consumiendo, sin embargo mencionó que no tuvo algún tratamiento de rehabilitación, mostró inestabilidad emocional, la cual ha permanecido desde el dos mil trece, por lo que lo hace vulnerable a recaer en dichas adicciones.

-En relación a su hija *****, no se encontró un lazo afectivo, ya que aunque intentaba hablar de la niña, en su mismo diálogo describía a su otra hija, con quien vive, perdiendo el punto central, no conoce la etapa de desarrollo en la que se encuentra.

c) Respecto de la niña *****

-Se presentó en compañía de su abuela materna ***** en tiempo y forma a la cita programada, en buenas condiciones de aseo e higiene personal, con esmero en su arreglo personal, se mostró tranquila, con apertura y disposición al proceso, fue empática, desenvuelta, espontánea.

-Se encontró a la niña acorde a su edad cronológica y con una estimulación cognitiva acorde a su etapa de desarrollo, asimismo se observó en ella que su diálogo corresponde a una niña de mayor edad, demostrando habilidad mental para entender los sucesos dentro de su entorno, identifica sus sentimientos y



pensamientos y sabe externarlos de manera correcta, sabe identificar lo que no corresponde a su propia percepción, por lo que no se identificaron conductas dentro de su entorno familiar que estén afectando su integridad, sano desarrollo emocional, psicosexual y de salud, por lo que evidenció que su núcleo familiar actual es capaz de otorgarle lo necesario.

-Se encontró un lazo afectivo importante con su abuela materna, ya que es ésta quien funge como figura materna de la niña, encontrándose sentimientos de protección, cuidados, seguridad y cariño en ella.

-Respecto de la figura paterna, la niña ***** lo percibe como ausente y poco interesado en ella, ya que se encontró anhelo por tener convivencia ocasional con él, sin embargo hizo referencia a que cuando tuvo la oportunidad de convivir con ella, él no se presentó, pero que quisiera verlo y convivir también con su hermana, dejando claro que no le gustaría vivir con él, ya que le gusta vivir con su abuela.

d) Conclusiones

-Por todo lo anterior, la perito concluyó que ***** cuenta con una adecuada estabilidad emocional, no se encontraron situaciones de riesgo en sus características de su personalidad, además de que cuenta con las herramientas y

habilidades necesarias para procurar el sano desarrollo de la niña

- La niña ***** se encontró acorde a su edad cronológica, con estabilidad psicológica y emocional, lo que sugiere que su entorno familiar materno es capaz de otorgarle la estimulación cognitiva y emocional propia para la etapa de desarrollo en la que se encuentra.

-Se sugirió que ***** y la niña ***** puedan iniciar un proceso psicológico, ya que se identificó una contaminación de emociones respecto a la muerte de la madre de la niña, lo que puede estar evitando que ambas lleven un proceso de duelo sano, lo que las mantiene en estado de tristeza ocasional.

Las **documentales en vía de informe**, visibles a fojas ciento ochenta y uno, ciento ochenta y dos, ciento ochenta y siete a ciento noventa, ciento noventa y cinco

trescientos noventa y tres a trescientos noventa y siete, de valor probatorio en términos de los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, justificándose con ello:

1. En los archivos con los que se cuentan en la Dirección del **Registro Público de la Propiedad y del Comercio**, no se encontró registro de bienes inmuebles a nombre de ***** ni a nombre de *****.



2. De la búsqueda efectuada en el archivo vehicular de la **Secretaría de Finanzas del Estado**, no se localizaron vehículos inscritos como propiedad de ***** y *****.

3. En los archivos de la **Administración Desconcentrada de Recaudación de Aguascalientes “1”**, se localizaron las declaraciones presentadas por ***** de los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve y la correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho a nombre de *****, de las que se advierte lo siguiente:

-En el mes de enero de dos mil dieciocho, ***** reportó ingresos por la suma de un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con treinta y ocho centavos, de la cual no le fue retenida cantidad alguna por concepto de impuestos, apareciendo como su retenedor la empresa *****.

-Del periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil dieciocho, ***** obtuvo ingresos por la suma de catorce mil setecientos cuarenta y siete pesos con ocho centavos, por concepto de jubilación en parcialidades, de la cual no le fue retenida cantidad alguna por concepto de impuestos, siendo su retenedor la sociedad *****.

-Del periodo comprendido de enero a septiembre de dos mil diecinueve, ***** obtuvo ingresos por la cantidad de sesenta y un mil seiscientos setenta y ocho pesos con ochenta y cinco centavos por concepto de sueldos y salarios, y la suma de dos mil setecientos sesenta y un pesos con noventa y ocho centavos, por concepto de jubilación en parcialidades, de las cuales le fue retenido el monto de dos mil quinientos setenta y tres pesos con ocho centavos por concepto de impuestos, siendo sus retenedores el ***** y la sociedad *****.

4. En los registros del **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)**, no se encontró registro en la base de datos a nombre de ***** ni de *****.

5. En los registros del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, se encontró afiliación como trabajador ante dicho instituto, de ***** , sin embargo, se encontró dado de baja desde el diecisiete de enero de dos mil dieciocho.

-Asimismo se encontró registro de afiliación como trabajadora ante dicho instituto de ***** , apareciendo con estatus vigente, siendo su salario diario base la cantidad de doscientos dieciséis pesos con setenta y cinco centavos, apareciendo como su patrón el *****.



6. Del informe emitido por la Secretaría de Finanzas del **Ayuntamiento de Aguascalientes**, se advierte que en padrón de licencias comerciales, no se encontraron registros a nombre de *****.

7. En los archivos de la **Fiscalía General del Estado**, se localizaron las siguientes carpetas de investigación:

.*****, iniciada en diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, por el delito de sustracción de menores e incapaces, en la Agencia del Ministerio Público adscrita al DIF Estatal, la cual se encuentra en integración, en la que aparece como acusada ***** y como denunciante *****.

.*****, iniciada en fecha uno de julio de dos mil veinte, por el delito de abuso de confianza, se turnó al Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial, bajo la carpeta digital *****; el cinco de enero de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso por un plazo de dos meses, bajo las medidas cautelares de firma periódica mensual ante el Juzgado y prohibición de salir del Estado, misma en la que aparece como imputado *****; como denunciante *****; y como ofendida *****.

Cabe señalar que dentro de autos también se ordenó realizar una valoración de trabajo social de ***** (quien era pareja del demandado), así como un estudio toxicológico

respecto de ***** , sin embargo, ante la imposibilidad de notificar al demandado de dicho estudio, y teniendo en cuenta la manifestación de la parte actora en el sentido de que la primera de los mencionados ya no es pareja sentimental del demandado, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se determinó prescindir de tales medios de convicción.

VI. Participación de la niña *****

Ahora, se destaca que de las personas menores de dieciocho años tienen el derecho humano a ser escuchadas y tomadas en cuenta en asuntos de su interés, considerándose para ello, su edad y desarrollo, el cual se encuentra consignado en los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2 fracción II, 6 fracción VII, 13 fracción XV, 71, 72, 73 y 74 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, y 242 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, derecho que conlleva la obligación de los tribunales de respetar en todo momento el derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes a emitir su opinión en asuntos en los que se encuentren inmersos sus intereses; derecho que ante su preferencia, no puede ser prescindible, porque, su finalidad es brindar a las personas menores de edad, una protección adicional



que permita su actuación sin las desventajas inherentes a su condición especial en los procedimientos jurisdiccionales⁹.

En cumplimiento a lo anterior, en audiencia desahogada en siete de octubre de dos mil diecinueve¹⁰, con la asistencia de la licenciada **Antonia Macías Gómez**, psicóloga adscrita al Centro de Psicología del Poder Judicial del Estado, la licenciada **Claudia Esthela López Franco** Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, así como del licenciado **Saúl Alonso Andrade**, tutor especial designado en autos, fue recabada la opinión de la niña *********, quien refirió:

*"(...)vengo de la escuela, estoy en el "*****", está por ***** , estoy en cuarto, llevo dieces, mi abuelita me lleva a la escuela, es la señora que me trajo ahorita, no está tan lejos mi casa, es de aquí a ***** , me vengo en camión, me pusieron en esta escuela porque mi mamá quería que fuera muy inteligente, y sacara buenas calificaciones y aunque en tercer grado no me saqué el primer lugar, me dijo la maestra que este año a lo mejor sí podía ser la primera.*

Siempre he vivido con mi abuelita, desde que vivía mi mamá.

No he visto a mi papá desde que tenía cuatro años, porque siempre me decía que me iba a traer cosas y no las cumplía, me prometía que me iba a traer un pastel y luego no llegaba y no me lo traía.

Para navidad solamente quiero una muñeca grande y un celular, pero mi abuelita me dice que mejor no pida eso de navidad, mejor que ella me lo va a comprar y va a ser uno nuevo y más grande.

*Nada más vivimos mi abuelita y yo, ella se dedica a lo de ***** , ella como trabaja en un edificio, ella checa los cuartos si son*

⁹ Apoya lo expuesto la tesis de jurisprudencia generada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la Décima Época, observable en el Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a./J. 11/2017 (10a.), la cual consigna:

DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados "derechos instrumentales" o "procedimentales", especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este alto tribunal.

¹⁰ fojas 61 a 64

grandes y si son casas de planta alta o planta baja, ella les pregunta por lo del material.

Ahorita estaba con mi abuelita, vi a mi papá y no lo saludé porque le tengo miedo, no me hizo nada, pero me da miedo porque tiene quemada la cara, el papá de él me dijo que mi papá se drogaba y que por eso se quemó.

Mi abuelita me dijo que sólo diga la verdad, que sólo responda las preguntas y no diga mentiras de con quién me quiero quedar, además mi abuelita no tuvo nada que ver con la desaparición de mi tío.

Mis cosas me las compra mi abuelita, cuando estaba mi mamá ella compraba mis cosas, cuando mi mamá falleció dice mi abuelita que le dejó el setenta por ciento y a mí me van a dar los cheques cuando cumpla dieciocho años, siempre que siga estudiando.

Mis secretos se los digo a mi abuelita, solamente le platico cómo me va en la escuela y que tengo tarea de esto y del otro, ya después me baño, hago la tarea y me voy a dormir.

Ella no me dice nada, sólo me dice que diga la verdad a las preguntas que me hagan, de con quién me quiero quedar, y que si me voy a vivir con mi papá, me voy a quedar con él, y que si me voy con él, se iría a la Ciudad de México, porque él vendería la casa, esa casa no es de mi mamá, es de mi abuelita, se iría para allá porque allá están mis primos y mis tíos.

Un día llegó borracho a la casa, estábamos cenando y él nos echó sal en la cara a mí y a mi mamá y ya no podíamos ver, entonces mi abuelita le habló a la policía, y mi papá se salió, se escapó para otra casa, esto nadie me lo contó, sólo me acuerdo de mi infancia.

En la escuela voy bien de calificaciones, a veces nueves y a veces dieces, estoy en cuarto grado, me gustan las matemáticas.

Yo recuerdo cuando era pequeña mi papá no tenía la cara quemada.”

(Transcripción literal)

La licenciada **Antonia Macías Gómez**, especialista en psicología que asistió a la diligencia, acode al artículo 242 BIS del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emitió el dictamen acerca de la libertad y confiabilidad de la opinión de la hija de los litigantes, concluyendo lo siguiente:

«(...) Con base en lo anterior dictamino que: la niña cuenta con la madurez intelectual adecuada a su edad y que es insuficiente para que comprenda el trámite realizado respecto a la convivencia y custodia provisional, siendo que de su dicho se expresa de manera parcialmente libre, toda vez que la niña presenta más información de la que debería saber para su edad, pareciendo ser que su abuela materna le platica todo lo que tiene que ver acerca de éste juicio y problemas familiares.

A juzgar de la apariencia y el dicho de la niña, se desprende que ésta es bien presentada, con apariencia sana y desarrollo acorde a su edad de lo cual se advierte que sus necesidades se encuentran cubiertas viviendo al lado de su abuela materna ya que es ella quien le brinda cuidados y atenciones



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

necesarios, mencionando la niña que desde pequeña es ella quien la ha cuidado desde antes que su madre falleciera.

Respecto a sus necesidades emocionales, se encuentran parcialmente satisfechas, toda vez que su progenitora murió este año pareciendo ser que ese tema aún no lo trasciende, debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentra; además, se desprende que no tiene convivencia ni contacto con su padre desde hace cuatro años, debido a que la niña muestra temor y desconfianza por la falta de comunicación con éste, asimismo, por la información brindada por su abuelo paterno al referir que su papá se drogaba.

Ahora bien, cabe señalar que la figura paterna es fundamental para el sano crecimiento de la niña, y es por ello que se recomienda que se efectúen convivencias de manera supervisada en el Centro de Encuentro y Convivencia Familiar "Casa Libertad", para que con ayuda de los profesionistas en psicología y las técnicas empleadas por los mismos exista la posibilidad de crear el lazo paterno filial.

Asimismo, acuda a un acompañamiento psicológico para que exista una sensibilización hacia su padre para que de esa manera se favorezca a la convivencia y se fortalezca el vínculo con su padre.

Ahora bien, por los párrafos que anteceden es que se recomienda que la niña ***** continúe viviendo bajo el cuidado de su abuela materna ***** , pues es ella quien satisface las necesidades que la misma requiere. Igualmente se recomienda a la señora que evite cualquier comentario negativo que pueda perjudicar al desarrollo integral de la menor de edad."

(Lo abreviado es propio)

Dictamen al que se le concede valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el artículo 300 y 347 del código procesal civil, pues refiere de manera clara y precisa los estudios realizados, los conocimientos practicados que tienen relación a la materia objeto de la prueba, los elementos y procedimientos efectuados que permiten dar respuesta a la cuestión planteada y los motivos y razones que sustentan sus conclusiones.

De igual manera, por escritos presentados en veinte y veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la tutriz especial designada y la Agente del Ministerio Público manifestaron que: tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente, consideran que existen elementos suficientes para

decretar la pérdida de la patria potestad que ejerce ***** sobre su hija *****, que lo más benéfico para dicha adolescente es que permanezca bajo la custodia de su abuela materna *****.

VII. Antecedentes.

-Mediante sentencia interlocutoria de quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 154 a 159), se resolvió la medida provisional de custodia exigida por los litigantes, habiéndose determinado que, durante la tramitación del presente juicio, sería ***** quien ejercería la custodia provisional de la niña ***** y se estableció un régimen de convivencia entre la infante con su progenitor.

-Por sentencia interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (foja 257), se condenó a ***** a pagar una pensión alimenticia provisional a favor de su hija *****, por la cantidad de dos mil seiscientos ochenta y siete pesos con cincuenta centavos mensuales, la cual debería entregarse a ***** en representación de su nieta *****.

-En proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se adecuaron los horarios de las convivencias que fueron establecidos en la sentencia interlocutoria de quince de octubre de dos mil diecinueve, y se requirió nuevamente a la titular del Centro de Encuentro y Convivencia Familiar “Casa Libertad”



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

para que programara las convivencias en los horarios señalados en dicho auto.

-Mediante oficio número ***** (foja 251), se proporcionó por parte del Centro de Encuentro y Convivencia Familiar “Casa Libertad”, calendario de convivencias entre la niña ***** con su progenitor, para los meses de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte.

-Por oficio número ***** (foja 377) signado por la licenciada Denisse Carolina Cervantes Valadez, Comisionada a la Jefatura de Unidad del Centro de Encuentro y Convivencia Familiar “Casa Libertad”, se remitió reporte de incidencias en relación a las convivencias establecidas entre la niña ***** con su progenitor, del que se advierte que *****, no se presentó a ninguna de las convivencias establecidas mediante el oficio *****, mismo que concluyó el treinta de enero de dos mil veinte, por lo cual no se pudo llevar a cabo la convivencia entre él y su hija; por su parte ***** asistió a todas las sesiones programadas en el calendario referido, a excepción de los días veinticuatro, veintinueve y treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En relación al expediente *****

-Es un hecho notorio que en este mismo juzgado se tramita el juicio *****, relativo al Procedimiento Especial de alimentos que inició ***** (finada), en contra de *****, en el que reclamó el pago de una pensión alimenticia provisional, definitiva y retroactiva para su hija *****

-Dentro de aquel juicio, mediante sentencia interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se condenó a ***** al pago de una pensión alimenticia provisional por la cantidad equivalente a un salario mínimo general vigente en el Estado.

-En veintitrés de enero de dos mil veinte, compareció ***** en representación de su nieta ***** a dar continuidad a aquel procedimiento, al ser quien detentaba la guarda y custodia provisional de la infante referida, de acuerdo a lo determinado en la sentencia interlocutoria emitida dentro del juicio en que se actúa.

-En auto de dos de junio de dos mil veinte, se determinó que el juicio tramitado bajo el expediente ***** había quedado sin materia, en razón de que en los autos del expediente *****, ya se había determinado la guarda y custodia de la infante *****, así como se estableció una pensión alimenticia provisional a su favor.

-En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio ***** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en proveído de ocho de diciembre de dos mil



veinte, atendiendo a que en aquel procedimiento existía una condena de alimentos provisionales, previa a la determinada en este juicio, con el objeto de que no hubiera una doble condena en contra de la misma persona por las mismas prestaciones, se determinó que en el juicio en que se actúa, quedó extinguido el reclamo de alimentos provisionales y definitivos, para que dicha acción fuera continuada por ***** en los autos del expediente *****, hasta la totalidad resolución de las prestaciones reclamadas en aquel juicio (alimentos provisionales, definitivos y retroactivos) a favor de la niña *****, **motivo por el cual en la presente resolución no se entrará al estudio de la acción de alimentos definitivos reclamada en el escrito inicial de demanda.**

-Mediante diligencia de catorce de junio de dos mil veintiuno, ***** fue requerido por el pago de la primera mensualidad por concepto de alimentos provisionales a que se le condenó en dicho expediente, y al no haberlo hecho se procedió al embargo de diversos bienes a fin de garantizar lo reclamado y se llevó a cabo el emplazamiento respectivo.

-Por sentencias interlocutorias de doce de agosto de dos mil veintiuno y nueve de diciembre de dos mil veintidós, fueron reguladas las planillas de liquidación interpuestas por ***** en representación de su nieta *****, en las que

se cuantificaron los montos que adeuda ***** por concepto de pensión alimenticia para su hija.

VIII. Estudio de la acción de pérdida de patria potestad.

Las autoridades de todos los niveles tienen la obligación de atender en todo momento al principio derivado del interés superior de la niñez y la adolescencia, entendiéndose por tal ello, que el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y el ejercicio pleno de sus derechos, sean considerados como directriz para la aplicación de las normas en los órdenes relativos a su vida¹¹, acorde a lo que disponen los artículos 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes.

Además, tal principio implica en caso de ser necesario, suplir la queja deficiente en toda su amplitud a favor de los niños, niñas y adolescentes, ya que, las controversias susceptibles de afectar a la familia, menores de edad o incapaces, son de interés social, por lo que la sociedad tiene interés en que la situación de los hijos se defina para alcanzar la protección de sus derechos; según lo establece la tesis con el rubro "MENORES DE EDAD O

¹¹ Sirve como apoyo la jurisprudencia por reiteración, producida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atinente a la Décima Época, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, tomo uno, página trescientos treinta y cuatro; que refiere: **INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.** En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".



INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE”¹².

Así pues, tenemos que tal principio implica que esta juzgadora al resolver cuestiones de niños, niñas y adolescentes, tome en cuenta los aspectos particulares de los infantes que le permitan determinar con precisión el ámbito de la protección requerida, tales como su opinión, necesidades físicas, afectivas y educativas, su sexo y personalidad, y la posibilidad de cada uno de los progenitores¹³; supliendo en caso de ser necesario la suplencia de la queja en favor de los infantes.

¹² Así consta en la tesis de jurisprudencia creada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de dos mil seis, página ciento sesenta y siete, cuyo contenido es el siguiente:

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.

¹³ Orienta lo señalado, la tesis originada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concerniente a la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro quince, febrero de dos mil quince, Tomo II, página mil trescientos noventa y siete; la cual consigna:

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le

Ahora, el doctrinario Rafael de Pina define la patria potestad como el conjunto de las facultades, que suponen también deberes, conferidas a quienes la ejercen en relación a las personas y bienes de los sujetos a ella, con el objeto de salvaguardarlas en la medida necesaria¹⁴.

Asimismo, el autor Galindo Garfias alude que la patria potestad es una institución establecida por el derecho, con las finalidades de asistencia y protección de los menores de edad no emancipados cuya filiación ha sido establecida legalmente, ya se trate de hijos nacidos de matrimonio, de hijos habidos fuera de él o de hijos adoptivos, cuyo ejercicio corresponde al progenitor o progenitores, respecto de los cuales ha quedado establecida legalmente su filiación, definiéndose como la autoridad atribuida a los padres para el cumplimiento de su deber de educar y proteger a sus hijos menores de edad no emancipados¹⁵.

Igualmente, el máximo tribunal del país ha definido la patria potestad como el conjunto de derecho, facultades y obligaciones que con base principalmente en la relación paterno-filial, la ley atribuye, entre otros, a los deberes de educación, asistencia y

permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad.

¹⁴ De Pina, Rafael; "Elementos de derecho civil mexicano, Introducción personas-familia; décima quinta edición, México mil novecientos ochenta y seis, Porrúa, página trescientos setenta y tres.

¹⁵ Galindo Garfias, Ignacio; Derecho Civil, Primer Curso, Parte General, Personas, Familia; México dos mil nueve, Porrúa; página seiscientos ochenta y seis.



protección integral, en sus aspectos físico, moral y social, que tienen para con ellos¹⁶.

En ese sentido, el artículo 435 del Código de Procedimientos Civiles del Estado¹⁷, dispone que la patria potestad es ejercida por los ascendientes hacia los hijos menores de edad, quienes están sujetos a ésta.

Así, del atestado del Registro Civil relativo al nacimiento de la adolescente *****¹⁸, se advierte que es hija de ***** y *****¹⁹, contando actualmente con doce años.

Asimismo, del atestado del Registro Civil visible a foja diez, se advierte que en *****¹⁹, falleció en esta Ciudad de Aguascalientes, *****¹⁹, madre de la infante *****¹⁹, por lo que, ante la minoría de edad de esta última y el fallecimiento de su madre, se encuentra sujeta a la patria potestad de *****¹⁹.

Ahora, el artículo 466 fracción III del Código Civil del Estado¹⁹, establece que la patria potestad puede perderse por el abandono de los padres, sin causa justificada de sus deberes de cuidado, alimentarios y en general aquellos inherentes a la patria

¹⁶ Suprema Corte de Justicia de la Nación; "Temas Selectos de Derecho Familiar, Patria Potestad"; Suprema Corte de Justicia de la Nación; México, dos mil once; página trece.

¹⁷ **Artículo 435.-** Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.

¹⁸ Visible a foja ocho del expediente.

¹⁹ **Artículo 466.-** La patria potestad se pierde por resolución judicial:

(...)

III.- Cuando por las costumbres de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o el desarrollo psicosexual, afectivo, intelectual o física de los hijos, aún cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la normatividad penal;

...

potestad o cuando por comprometer la salud, la seguridad o el desarrollo psicológico, sexual, afectivo, intelectual o físico de los hijos, aun cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la normatividad penal;

En ese sentido, para determinar lo conducente, es menester precisar cuáles son las obligaciones de los ascendientes derivadas del ejercicio de la patria potestad de sus hijos.

Los numerales 434, 436, 437, 439, 440, 445 y 446 del Código Civil del Estado, indican:

“Artículo 434.- *En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición.*

Quién ejerza la patria potestad, debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, en consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar cualquier acto de alienación parental.

Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su menor hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a obtener denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor para producir en el menor, rechazo, rencor, odio o desprecio hacia éste, y/o con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

Artículo 436.- *La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las leyes aplicables.*

Artículo 437.- *La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.*

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el Juez de lo Familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

La custodia es un derecho y obligación que corresponde a quienes ejercen la patria potestad, ella implica la obligación de cohabitar con el menor, guardar y cuidar su persona, su educación, su formación y sus bienes.

Artículo 439.- *En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores de edad. En caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el juicio respectivo lo conducente oyendo al Ministerio Público.*

En este supuesto, con base en el interés superior del menor de edad, éste quedará bajo los cuidados y atenciones de uno o ambos progenitores, atendiendo a lo que el Juez considere más benéfico.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El cónyuge que no ejerza la custodia estará obligado a colaborar en la alimentación del menor de edad y conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el mismo, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.

Durante la tramitación del juicio y a petición de cualquiera de las partes, el Juez podrá proveer respecto de la guarda y custodia, así como de la convivencia como medida provisional.

Teniendo en todo momento ambos progenitores, la obligación de evitar cualquier conducta de alienación parental hacia sus hijos.

Artículo 440.- *Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con los descendientes, salvo que exista peligro para éstos.*

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición a la petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial.

En cualquier momento en que se presentare alienación parental por parte de alguno de los progenitores hacia los hijos, el Juez, de oficio ordenará las medidas terapéuticas necesarias para los menores hijos, con la finalidad de restablecer la sana convivencia con ambos progenitores. Para estos efectos, ambos progenitores tendrán la obligación de colaborar en el cumplimiento de las medidas que sean determinadas, pudiendo el juez hacer uso de las medidas de apremio que establezca la ley adjetiva civil, con la facultad en caso de ser necesario, de decretar la suspensión de la custodia o convivencia previamente establecidas.

Artículo 445.- *A las personas que tiene al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente.*

Cuando llegue a conocimiento de la autoridad administrativa competente, que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda.

Artículo 446.- *Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.*

La facultad de corregir ni implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 437 Ter de este Código."

De los preceptos trasuntados se coligen, las obligaciones inherentes al ejercicio de la patria potestad, tales como cohabitar con los hijos menores de dieciocho años, guardar y cuidar su persona y sus bienes, educarlos, su formación, poder convivir con el niño, niña o adolescente o tenerlo bajo su custodia, avenir el acercamiento con el diverso progenitor, no realizar actos que

podrían afectar su sano desarrollo integral, corregirlos y observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo, entre otras.

Entonces, la institución que la patria potestad es un medio de protección establecido en nuestra carta magna con el objeto de asegurar y obligar a los ascendientes al cumplimiento de sus deberes parentales, pues, está dirigida a la protección, educación y formación integral de los descendientes, y al ser dicha institución prioritaria del interés de la niñez, su cumplimiento es objeto de observancia por los poderes públicos²⁰, para efectos de que en caso de un niño, niña o adolescente sea colocado en una situación vulnerable por el incumplimiento o la inobservancia de los deberes parentales por parte de los ascendientes, sea declare la pérdida de ésta.

Pues bien, la actora sustentó su acción en el hecho de que su hija ***** (finada), en el mes de noviembre de dos mil nueve, inició una relación de concubinato con el señor ***** , producto de la cual procrearon una hija de nombre ***** , que la relación entre ellos fue muy corta y cuando

²⁰ Robustece lo expuesto por su argumento rector, la tesis: de jurisprudencia, producida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro diecinueve, junio de dos mil quince, Tomo I, página quinientos sesenta y tres; que a la letra dice: **PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS.** La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez.



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

se separaron, su hija ***** (finada) y su nieta
*****, regresaron a habitar el domicilio de la actora.

Aduce que desde la separación de su hija con el
demandado, éste no se ha hecho cargo de su hija *****, ni
económicamente ni moralmente, puesto que nunca convive con ella
y en cuanto a los alimentos, fue su finada hija quien siempre se hizo
cargo de cubrirlos, e incluso presentó una demanda de alimentos la
cual se tramitó bajo el expediente número ***** del índice de
este Juzgado Primero Familiar.

Señala que el *****, su hija
***** (finada) sufrió un accidente en su trabajo,
en el que lamentablemente perdió la vida, por lo que, para realizar
diversos trámites legales, es necesario que sea ella quien cuente
con la guarda y custodia de su nieta, pues la niña está
acostumbrada a vivir con ella, que es ella quien la cuidaba cuando
su mamá tenía que ir a trabajar y es su deseo hacerse cargo de las
necesidades que conllevan la guarda y custodia de su nieta, pues el
demandado ha ejercido maltrato sobre la niña *****, por tantas
omisiones de cuidado y por el temor que tiene por la vida y
seguridad de su nieta, es que promueve el presente juicio.

Así pues, con las pruebas desahogadas y de las constancias
de autos, se advierte que ***** es hija de *****
(finada) y *****, que la primera de los mencionados

falleció en el mes de febrero de dos mil diecinueve, con la testimonial admitida a la actora, se acreditó que a partir del fallecimiento de *****, es ***** quien se ha hecho cargo del cuidado de su nieta *****, que la lleva a la escuela, asiste a reuniones y festivales escolares, cubre sus necesidades físicas y emocionales, y en general le proporciona lo necesario para un correcto desarrollo integral, lo que se robustece con las documentales adjuntas al plan probatorio de la actora, así como con el informe rendido por el *****, de las cuales se desprende que ***** cuenta con buenas calificaciones, y con la declaración de confeso de ***** de haber sido omiso en ocuparse del cuidado, salud o educación de su hija *****

Además de la prueba testimonial también se desprende que ***** no proporciona cantidad alguna para cubrir las necesidades de su hija, lo que de igual manera se corrobora con la declaración de confeso del demandado, en el que se le tuvo por reconociendo que ha incumplido con su obligación de proporcionar alimentos a su hija *****, a pesar de que ha contado con empleos que le generan ingresos, por lo que está en posibilidad de proporcionar alimentos a su hija; en el mismo sentido, con las documentales adjuntas al plan probatorio de la actora, se justificó que, hasta antes del fallecimiento de ***** (finada), se le realizaban descuentos vía nómina por concepto de



pago de colegiaturas de su hija, y de las actuaciones del expediente ***** se advierte que la madre de la niña *****, inició procedimiento especial de alimentos, a fin de que fijara el monto de la pensión alimenticia a cargo de *****, constancias de las cuales se colige que efectivamente el demandado ha sido omiso en proporcionar alimentos a su hija.

Con la prueba testimonial, también quedó justificado que ***** no convive con su hija *****, lo que de igual manera se robustece con las actuaciones del presente juicio, pues en audiencia de siete de octubre de dos mil diecinueve, en la que se recabó la participación de la infante *****, la propia niña manifestó que siempre ha vivido con su abuelita, desde que vivía su mamá, que hasta ese momento no había visto a su papá desde que tenía cuatro años, siendo que al momento de la diligencia la niña contaba con nueve años de edad, es decir, que para entonces ya habían transcurrido cinco años de ausencia del demandado en la vida de su hija; en el mismo sentido, se evidencia de las constancias de autos que mediante interlocutoria de quince de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió la medida provisional de custodia exigida por la actora *****, en la que se determinó que la guarda y custodia provisional de la niña ***** correspondería a la actora, y se estableció un régimen de convivencia entre la niña con su progenitor, advirtiéndose del

reporte de incidencias al que se hizo referencia en el apartado de antecedentes de esta resolución, que ***** no asistió a ninguna de las convivencias programadas, mientras que ***** únicamente fue omisa de presentar a su nieta en tres ocasiones, lo cual denota un notorio desinterés de parte del demandado en tener acercamiento a su hija.

No se soslaya que el demandado manifestó al momento de dar contestación a la demanda que la actora tiene antecedentes penales en la hoy Ciudad de México, siendo esa una de las razones por las que se encuentra radicando en esta Ciudad; más con las pruebas que fueron aportadas por el demandado, relativas a las documentales, documentales en vía de informe, presuncional e instrumental, no se logró acreditar dicha afirmación, a pesar de que tenía la carga para hacerlo, conforme lo dispone el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

También manifestó que aún después de la ruptura con la madre de su hija, continuaron teniendo contacto, habiendo llegado a un acuerdo en el que ella tendría la custodia de hecho de su hija y él podría convivir con la niña tres veces por semana, siendo que él acudía por su hija, iba a la escuela por ella y estaba presente en sus festivales escolares, que él siempre ha cumplido con sus obligaciones alimentarias para con su hija, sin embargo, del caudal probatorio que fue desahogado en autos, en modo alguno logró justificar tales aseveraciones, pues de conformidad con lo dispuesto



en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tenía la carga para hacerlo; contrario a ello, con la instrumental de actuaciones se evidenció que sí fue demandado por la madre de su hija, por el pago de alimentos provisionales, definitivos y retroactivos a favor de su hija *****, procedimiento que se tramita en este mismo juzgado bajo el número de expediente *****, en el cual fue condenado al pago de una pensión alimenticia provisional a favor de *****, que ha sido requerido de pago, existe embargo sobre bienes de su propiedad e inclusive constan diversas planillas de liquidación que han sido reguladas, en las que se han determinado los adeudos con que cuenta ***** por concepto de pensión alimenticia.

Arguye que lo único que pretende la abuela de su hija es obtener un lucro, ya que la madre de su hija era *****, por lo que contaba con un seguro de vida, el cual era precisamente para su hija, siendo que la actora no ha podido cobrar ese seguro, dado que ella no tiene la custodia ni la patria potestad de su hija, por tanto la abuela materna ha privado a su nieta de convivir con su padre, pues tiene el interés de obtener un beneficio económico para obtener un documento que le permita acceder al citado seguro de vida, siendo esa la verdadera razón que tiene para llevar el procedimiento que plantea, afirmaciones de las cuales únicamente logró justificar con la documental en vía de informe rendida por la

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, que efectivamente ***** (finada) era *****, que falleció en cumplimiento a su deber en febrero de dos mil diecinueve y que contaba con un seguro de vida, más en modo alguno se acreditó que la pretensión de la parte actora en reclamar la patria potestad y custodia de su nieta, sea precisamente obtener un lucro, ni que ese sea el motivo por el que dice la actora ha privado a su hija de convivir con él, pues si bien es cierto, del informe rendido por la Fiscalía General del Estado se desprende que posterior al fallecimiento de ***** el demandado interpuso denuncia por hechos presuntivamente constitutivos del delito de sustracción de menores, en la que adujo que la abuela de su hija no le permitía tener contacto con la infante, no menos cierto es que a la fecha no existe resolución en la que se hubiera condenado a la actora por tal hecho delictivo, como tampoco logró justificar dentro del presente juicio que se le hubiera privado de tener contacto con su hija, pues no aportó prueba alguna tendiente a demostrarlo, a pesar de que tenía la carga para hacerlo, de conformidad con la obligación que le impone el numeral 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; contrario a ello, de las constancia que obran en autos se aprecia que una vez que se resolvió la medida provisional de custodia y se estableció un régimen de convivencia entre la niña ***** con el demandado, fue ***** quien se abstuvo de tener acercamiento con



su hija, pues si bien de la valoración psicológica que se practicó al demandado, éste refirió que sí se presentó a la primera convivencia programada, más al ver que la abuela de su hija no había comparecido, decidió no volver a acercarse a las convivencias, con el informe emitido por el Centro de Encuentro y Convivencia Familiar “Casa Libertad”, se desvirtuó tal afirmación, pues del mismo se desprende que la niña *****, del periodo comprendido del mes de noviembre de dos mil diecinueve a enero de dos mil veinte, que comprendió el calendario de convivencias proporcionado por dicho centro, únicamente faltó a tres de las convivencias, más no fue a la primera, sino que sus ausencias se registraron en el mes de diciembre, todo lo cual denota que ***** no ha obstaculizado en forma alguna, por lo menos dentro del procedimiento, las convivencias entre su nieta con el demandado, pues la presentó al Centro de Encuentro y Convivencia Familiar “Casa Libertad”, los días y horarios establecidos para las convivencias, siendo ***** quien no compareció en ninguna de las fechas programadas, lo que denota un notorio desinterés en ser partícipe en la vida de su hija.

En otro punto el demandado señala que la abuela materna no es un un ejemplo de virtudes, pues refirió que la actora fue madre de tres hijos, una de ellas, la madre de su hija ***** (finada), otro de ellos de nombre

***** , quien cuenta con aproximadamente con veintiocho años de edad y es una persona con capacidades diferentes, ya que tiene disfunciones psicomotrices, quien está abandonado en Ciudad de México, ya que su madre (actora en este juicio), no lo ha querido apoyar de forma alguna; y el tercer hijo de la actora de nombre ***** , falleció en el año dos mil dieciséis, como consecuencia de que se ahorcó en su domicilio, que es el mismo en el que vive la actora, de lo que se puede observar que la actora no ha sido buena madre, por lo que él tiene el temor de que la actora no sea un buen ejemplo para su hija ***** , que teme por la vida e integridad de su hija, pues por las costumbres, el grado de educación y la forma de ser de la abuela materna, quien es una persona agresiva y posesiva, es que teme que se pueda afectar a su hija de alguna forma, como ha sucedido con sus otros hijos, sin embargo, con las pruebas que fueron desahogadas en autos, en modo alguno se justificó ninguna de sus aseveraciones, ni que la actora hubiera tenido dos hijos más a la madre del presente juicio, ni la discapacidad con la que dice cuenta el hijo diverso de la actora y menos aún que ***** haya sido omisa en apoyarlo; como tampoco logró justificar el fallecimiento de ***** , ni que su deceso, hubiera sido consecuencia de la educación que la actora proporcionó a su hijo, pues en términos del numeral 235 del Código de Procedimientos Civiles del



Estado, el demandado tenía la carga probatoria para justificar tales aseveraciones.

Sin soslayar que del informe que fue rendido por el Director de Justicia Municipal de Aguascalientes, se obtuvo que en sus registros se encontró la detención en ocho ocasiones de un sujeto de nombre ***** , más no se tiene la constancia de que sea él el hijo de la actora a quien se refiere el demandado.

Bajo ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 466 fracción III del Código Civil del Estado, se **condena** a ***** a la pérdida de la patria potestad que detentaban sobre su hija ***** , y se determina que en lo subsecuente corresponderá en forma exclusiva a ***** el ejercicio de la patria potestad de dicha infante.

IX. Determinación de la custodia.

Ahora bien, es menester que esta autoridad se pronuncie respecto de la persona que ejercerá la custodia definitiva de ***** , en base al principio derivado del interés superior de la infancia, y las particulares de su vida.

Así, el artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone que la custodia constituye un derecho y obligación que corresponde a quienes ejercen la patria potestad, ella implica la obligación de cohabitar con la menor de dieciocho años, guardar y cuidar su persona, su educación, su formación y sus bienes, y a

falta de éstos, tal derecho pasará a los ascendientes en segundo grado.

Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que en base al interés superior de todo niño, niña y adolescente, el juzgador al determinar cuestiones respecto de su guarda y custodia definitiva, debe considerar la regulación de los deberes y facultades que configuran la patria potestad, siempre pensada y orientada en beneficio de los hijos, considerando para ello no solo medidas sobre el cuidado y educación de los hijos, sino las condiciones psicológicas y afectivas de los infantes para su bienestar integral, de forma tal que se les coloque en el escenario que sea más adecuado para éstos, y puedan ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación y proyección de futuro, buscando su cabal formación, y su integración familiar y social²¹.

Asimismo, el máximo tribunal del país ha destacado que al momento de resolver las cuestiones referentes guarda y custodia de menores de dieciocho años, la dificultad de la decisión radica en determinar y delimitar el contenido del interés del niño, niña o adolescente, ya que, no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; pues, la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada, y es precisamente de

²¹ INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA., Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis 1a./J. 31/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro cinco, abril de dos mil catorce, Tomo I, página cuatrocientos cincuenta y uno, registro digital 2006227.



dicha dinámica, y las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la cual debe determinarse en base a cuál es el sistema de custodia más benéfico para los infantes, considerándose al efecto las circunstancias en que concurren cada progenitor, y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del infante²².

Al efecto, de una interpretación sistemática de los artículos 437 y 439 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que disponen que en caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos progenitores deben continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los menores de edad y a falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en el citado ordenamiento legal, ejercerán tanto la patria potestad como la guarda y custodia, los ascendientes en segundo grado, tomando en cuenta las circunstancias del caso y en caso de desacuerdo, el Juez resolverá en el juicio respectivo lo conducente, oyendo al Ministerio Público.

Ello, evaluando cuál de los ascendientes es el más apto e idóneo para cumplir con los deberes y las obligaciones para

²² GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO], Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro siete, junio de dos mil catorce, Tomo I, página doscientos diecisiete, registro digital 25103.

resguardar los derechos de los infantes, buscándose siempre las condiciones más favorables para el desarrollo de los niños, esto es, para cuidar y velar de manera ideal en su seguridad a los descendientes menores de edad, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior.

En este contexto, de lo actuado se destaca que:

- La infante ***** es hija de ***** y ***** , pues así se revela del atestado del Registro Civil visible a foja ocho, de pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

-La madre de la infante falleció el ***** , como se evidenció con el atestado del Registro Civil visible a foja diez, de pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

- La niña ***** al comparecer vía remota ante la presencia judicial a la diligencia en la que se recabó su participación, en presencia del especialista en psicología, la representante social y el tutor especial designado, señaló que siempre ha vivido con su abuela materna inclusive desde que su mamá vivía, que es ella quien se encarga de su cuidado y de igual manera de la valoración psicológica practicada a la infante (foja 423), indicó que le gusta



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

vivir con su abuela y la dinámica familiar que lleva a cabo actualmente.

- La especialista en psicología que asistió a la diligencia en la que se recabó la participación de *****, al emitir el dictamen correspondiente señaló que la niña se presentó en buen estado de aliño personal, con apariencia sana, desarrollo acorde a su edad, de lo cual se advierte que sus necesidades se encuentran cubiertas viviendo a lado de su abuela materna ya que es ella quien le brinda los cuidados y atenciones necesarios, por lo que considera que lo más benéfico para dicha infante es que permanezcan bajo la custodia de su abuela materna.

Dictamen al que se le concede valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el artículo 300 y 347 del código procesal civil, pues refiere de manera clara y precisa los estudios realizados, los conocimientos practicados que tienen relación a la materia objeto de la prueba, los elementos y procedimientos efectuados que permiten dar respuesta a la cuestión planteada y los motivos y razones que sustentan sus conclusiones.

- La opinión de la Tutora especial designada y la Agente del Ministerio Público de la adscripción quienes, conforme lo dispone el artículo 242 bis fracción V del código de procedimientos civiles, manifiestan que lo más benéfico para la niña es que permanezca bajo la guarda y custodia de su abuela materna.

- Bajo este orden de ideas, considerando que:

1. La niña ***** cuenta con doce años, esto es, aun requiere de la asistencia de un adulto que le auxilie y la asista para satisfacer sus necesidades.

2. La infante ***** cuenta con una vinculación fortalecida con su abuela materna *****, quien se ha encargado de cubrir sus necesidades físicas y educativas, inclusive desde antes del fallecimiento de su madre y hasta la fecha.

3. La niña ***** tiene como derecho fundamental a vivir en un entorno social donde se garantice su bienestar y sano desarrollo integral, libre de cualquier tipo de violencia, así como a no ser sustraída del medio en donde se desenvuelve, esto es, a no ser apartada del lugar que la niña reconoce como su hogar, en donde desarrolla un rol al que se encuentra acostumbrada por la dinámica familiar que se lleva a cabo en dicho domicilio, siendo que de las constancias que obran en autos se evidenció que la niña se encuentra habituada a la dinámica que lleva viviendo al lado de su abuela materna.

4. La representante social y la Tutora especial designada expresaron que la niña ***** debía permanecer bajo el cuidado de su abuela materna.

5. Del dictamen de trabajo social recabado en autos, se advierte que las condiciones de la vivienda en que habita la infante con su abuela materna son buenas, cuenta con los servicios y



mobiliario indispensable para cubrir las necesidades de la infante, además de que la señor ***** le da una buena calidad de vida a su nieta, como el cariño que requiere la niña.

6. Del dictamen psicológico que se realizó a los litigantes, se obtuvo que ***** tiene un lazo fortalecido hacia su nieta, además de haber mostrado interés por su desarrollo académico y cognitivo, que no se encontraron factores de riesgo en su estilo de crianza, siendo una figura presente y relevante en la vida de su nieta y cuenta con las habilidades de crianza necesarias, además de que su emocionalidad es estable.

7. No se advierte ni indiciariamente que la infante ***** corra algún riesgo o peligro por el sólo hecho de vivir con su abuela materna.

8. ***** se ha desentendido de las obligaciones de cuidado de su hija por lo que fue condenado a la pérdida de la patria potestad en esta resolución, inclusive, no se presentó a las convivencias que fueron programadas por el Centro de Encuentro y Convivencia Familiar “Casa Libertad”, en términos de lo ordenado por esta autoridad y de la valoración psicológica que se le practicó, no se identificó algún lazo afectivo entre él y su hija.

Por ende, esta juzgadora estima que lo más benéfico para ***** es que continúen bajo la guarda y custodia definitiva de su abuela materna *****, con la finalidad de que

permanezcan creciendo en un ambiente de afecto, seguridad para su correcto desarrollo físico y mental, garantizando su desarrollo integral y crecimiento pleno, de acuerdo con el principio de Interés Superior de la niñez.

IX. Derecho de Convivencia

Ahora bien, conforme al párrafo segundo del artículo 440 del Código Civil del Estado²³, no puede impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre ***** y su padre *****, luego, es necesario propiciar la convivencia de la infante con el progenitor no custodio, pues así, se potencializa su interés superior.

Así, debe considerarse que todo niña, niño y adolescente tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres y la familia ampliada de estos de modo regular, materializándose como el derecho de **convivencia**, el cual se encuentra contemplado en los artículos 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, y 437 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, ya que ello fomenta su

²³ Artículo 440. Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con los descendientes, salvo que exista peligro para éstos.
No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición a la petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial.
(...)



sano desarrollo, integración al núcleo familiar, y la identidad del grupo social al que pertenece.

Tal derecho constituye una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de niños, niñas y adolescentes y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia de los infantes, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a ellos, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo²⁴.

Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que al momento de determinar lo conducente respecto de cuestiones de convivencia con menores de dieciocho años, el juzgador debe analizar diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los infantes involucrados; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad de la persona a convivir, la distancia geográfica entre la residencia habitual de los niños, niñas o adolescentes y del familiar; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador

²⁴ Así consta en la tesis de jurisprudencia creada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, relativa a la Novena Época, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de once, página novecientos sesenta y siete; cuyo texto refiere:

DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU NATURALEZA. La esencia de las visitas y las convivencias se encuentra en las relaciones humanas y en la comunicación entre personas que, en conjunto, tienden a enriquecerlas espiritual y afectivamente, sobre todo al menor tanto en situaciones de normalidad, como de afectación o en riesgo de ser afectado, lo que constituye la mayor justificación que se puede dar a nuestra institución de visitas y convivencias.

discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los infantes involucrados²⁵.

Luego, acorde a lo dispuesto por el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratándose de derechos de menores de dieciocho años, específicamente, en lo concerniente a su derecho humano a mantener una relación con sus familiares, y no ser separados de éstos, la autoridad judicial debe adoptar providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, como responsable del bien común, resguardando el rol preponderante de la familia en la protección del niño, mediante medidas que promuevan la unidad familiar.

Conforme a ello, esta autoridad se encuentra obligada a tutelar el derecho humano de ***** a tener una relación y contacto directo con su progenitor, pues ello implica que la niña tenga una certeza de sus orígenes biológicos, el núcleo familiar al que pertenece y factores que son indispensables en la niña para la integración de su personalidad.

²⁵ Ilustra lo expuesto por su argumento rector la tesis aislada creada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tocante a la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, Tomo dos, página mil sesenta y tres; que dispone **RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN.** Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitadamente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial.



Por tales consideraciones, el derecho de todo niño, niña y adolescente a la protección de la familia, y en particular al disfrute de la vida de familia, manteniendo la unidad familiar en la mayor medida posible, **siempre debe prevalecer.**

Ahora bien, en esta resolución ***** fue condenado a la pérdida de la patria potestad que detentaba sobre su hija *****, siendo que una de las consecuencias de ello es que el progenitor condenado no tenga derechos respecto de su hija, es decir, la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de la infante, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad.

Sin embargo, independientemente de las consecuencias apuntadas *-que se relacionan directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la patria potestad-*, **de ello no se aprecia que su pérdida conlleve indefectiblemente que deba impedirse a los hijos menores de dieciocho años ejercer el derecho de convivencia con sus progenitores** en tanto que, por un lado, ese derecho no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos y, por el otro, no todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad.

En ese orden de ideas, resulta indispensable atender al interés superior de todo niño, niña y adolescente, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél.

En ese contexto, esta juzgadora debe atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado de la infante, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho de ***** a obtener un desarrollo psicoemocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia²⁶.

Así, en la presente resolución ***** fue condenado a la pérdida de la patria potestad de su hija *****, al

²⁶ Fundamenta lo expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, observable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, página ciento setenta y seis; la cual dispone:

PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES. Una de las consecuencias de la pérdida de la patria potestad es que el progenitor condenado no tenga derechos respecto de sus hijos, es decir, la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, independientemente de las consecuencias apuntadas -que se relacionan directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la patria potestad-, de ello no se aprecia que su pérdida conlleve indefectiblemente que deba impedirse al menor ejercer el derecho de convivencia con sus progenitores en tanto que, por un lado, ese derecho no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos y, por el otro, no todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad. En ese orden de ideas resulta indispensable atender al interés superior del menor, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél; de ahí que el juez de lo familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia.



haber sido omiso en dar cabal cumplimiento a sus deberes parentales, específicamente, en lo relativo a sus deberes de cuidado y asistencia, como el proporcionar alimentos a su hija, a efecto de que fuera garantizada su subsistencia y contara con los satisfactores necesarios para tener un sano desarrollo integral.

A saber, la causal en que incurrió ***** para la pérdida del ejercicio de la patria potestad sobre su hija no derivó de conductas graves, en las que el demandado hubiere efectuado actos en contra de la integridad de *****, como lo serían al efecto haber realizado conductas de violencia en las que la víctima fuere la infante involucrada, o cualquier otra semejante, que tuviera una repercusión directa en la niña, de forma tal que fuere evidente que el contacto entre el actor y su hija ***** implicara un riesgo para aquella infante, pues inclusive de la valoración psicológica realizada propia *****, se advierte que ésta reflejó anhelo de tener convivencia ocasional con él.

Es decir, la causal de pérdida de patria potestad, no tuvo su origen en que ***** hubiere realizado conductas que impliquen que el contacto con su hija menor de dieciocho años conlleve un riesgo para *****, y su sano desarrollo integral, por lo cual, no puede concluirse que establecer un régimen de

convivencias entre el demandado y su hija, es contrario a su interés superior²⁷.

De ahí que, esta juzgadora estima que el establecimiento de un régimen de convivencia entre ***** y su hija ***** , es acorde a su interés superior en respeto a su derecho fundamental a mantener una relación y contacto directo con sus ascendientes.

Lo previo deriva, porque la convivencia constituye un derecho fundamental de los niños que viven separados de alguno

²⁷ Ilustra lo expuesto por su argumento rector la tesis aislada creada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, atinente a la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de dos mil diez, página dos mil seis; misma que refiere:

PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, NO IMPLICA LA RESTRICCIÓN DEL DERECHO DEL MENOR A LA CONVIVENCIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 417 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE HASTA EL UNO DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE Y 416 BIS VIGENTE A PARTIR DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE). La patria potestad es un conjunto de facultades, derechos y deberes que existen entre el o los progenitores y su descendiente menor de edad, que tiene como objeto la educación, asistencia y protección de su persona y bienes. Si las facultades, derechos y deberes que puede ejercer el progenitor se bifurcan en cuanto a la persona y bienes del menor hijo, y la sanción civil establecida relativa a la pérdida de la patria potestad no hace alguna distinción, debe concluirse que esa pérdida implica los derechos y facultades otorgados al ascendiente, intrínsecos al ejercicio de la patria potestad. El artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, anterior a la reforma publicada en la Gaceta Oficial el dos de febrero de dos mil siete, indica que los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos. Sobre esta base, se dispone que no podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre el menor y sus parientes, y si hubiere oposición, a petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. La norma es clara y expresa en cuanto a que sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia indicado, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezcan en el convenio o resolución judicial. Y se ordena que el Juez de lo familiar incluso podrá decretar el cambio de custodia de los menores cuando quien tenga decretada judicialmente la custodia provisional o definitiva sobre ellos, realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los menores con la persona o personas que tengan reconocido judicialmente su derecho a la misma. Luego, la pérdida del derecho de convivencia sólo puede tener como fuente una determinación judicial, atendiendo a las circunstancias del caso, y las modalidades de su ejercicio quedar sujetas a lo que el Juez determine, por lo que no puede suponerse o desprenderse implícitamente aquella consecuencia jurídica sino que, acorde con el principio de legalidad tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, el Juez debe expresar los motivos y fundamentos de ello, y será perfectamente compatible con la posibilidad de que existiera la pérdida de la patria potestad. Esa norma que regulaba el derecho de convivencia fue objeto de una reforma el dos de febrero de dos mil siete, para quedar ubicado en el artículo 416 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone que el derecho de convivencia que se regula es el habido entre progenitores e hijos que estén bajo la patria potestad, aun cuando no vivan bajo el mismo techo y ascendientes e hijos y sólo si existe oposición, el Juez de lo familiar debe resolver, atendiendo al interés superior del menor, previa audiencia de este último. De lo expuesto no aparece una norma expresa que establezca la pérdida del derecho a la convivencia, como consecuencia de la pérdida de la patria potestad, sino solamente a regular el supuesto de la convivencia cuando se ejerce la patria potestad por ambos progenitores; tampoco se desprende una prohibición para que el progenitor que perdió la patria potestad por el incumplimiento a su obligación alimentaria, pueda convivir con el menor, sino únicamente limitarse o suspenderse, en los supuestos de incumplimiento a las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los hijos. La intención del legislador con esa reforma legal se orientó por el contenido de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la posibilidad de ofrecer al menor las oportunidades para su desarrollo armónico y saludable; así se desprende de la exposición de motivos de esa reforma; de ese modo, es que atendiendo al artículo 9, inciso 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce el derecho fundamental del menor a que cuando esté separado de uno o de ambos padres, los Estados respetarán ese derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Ese derecho de convivir con los padres no se encuentra sujeto a que alguno de ellos haya perdido la patria potestad que ejercía sobre el mismo, sino que el dato destacado es que el menor viva separado de ellos, y lo que se garantiza es su derecho a mantener relaciones personales y contacto directo de modo regular, ya que lo que interesa es que exista un sano y armonioso desarrollo de su personalidad, y la necesidad de que crezca en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, como se deriva del preámbulo de la citada convención.



de sus padres. Dicha prerrogativa se encuentra reconocida de manera implícita en el artículo 4° constitucional, en sus párrafos octavo y noveno, de donde se advierte el derecho de que se propicien condiciones suficientes para garantizar un desarrollo adecuado, tanto psicológico, como emocional; condiciones que pueden darse de mejor manera si existe una convivencia con ambos progenitores, que a su vez genere los lazos afectivos necesarios para tal efecto.

Abundando a ello, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece de manera explícita en su artículo 9.3 la obligación de los Estados partes de respetar el derecho de los niños a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular, salvo que ello sea contrario a su interés superior.

Este derecho se encuentra reconocido a favor de los padres, pero con un tinte diverso. Pues respecto de los progenitores, la prerrogativa adquiere el carácter de "derecho-deber" en tanto que, por una parte, el padre no custodio posee el derecho de convivir con los niños, derivado de la patria potestad que se ejerce sobre ellos, y, por otra, existe un deber del padre a convivir, una obligación correlativa al derecho de los niños a la convivencia.

Aunado a lo anterior, la convivencia permite a los menores de dieciocho años un sano desarrollo, pues conlleva al

conocimiento y trato directo que se tiene de los niños con sus ascendientes, a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen, pues el desarrollo normal de un niño, niña o adolescente, se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y a su grupo social, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres.

Bajo esta óptica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 4º y 133 Constitucional, 1, 3, 5, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1, 2, 6, 7, 13, 14 y 23 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, 439 y 440 del Código Civil del Estado y 186 párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se reconoce el derecho de ***** a mantener convivencia con su progenitor ***** , empero, no se establece un régimen de convivencia entre la citada infante con su padre, a razón de que de las constancias que obran en autos, se colige que en modo alguno existe una relación entre ***** con su padre, siendo latente el desinterés de este a generar un lazo afectivo con



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

su hija, pues no se presentó a ninguna de las convivencias que fueron establecidas por el Centro de Encuentro y Convivencia Familiar “Casa Libertad”, en términos de lo ordenado por esta autoridad, por tanto, es claro que el establecimiento de un régimen de convivencia implica un factor de riesgo para el estado emocional de la niña *****, quien solo cuenta con la edad de doce años, al ser clara la actitud negligente que ha tenido el demandado para involucrarse con su hija e inclusive para acatar los requerimientos que se le realizaron por parte de esta autoridad para que compareciera a las convivencias, a que le fuera practicado el estudio toxicológico, pues él mismo indicó a la perito en psicología adscrita a la Procuraduría de la Protección de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que de haber sabido que si cita se había pasado, no se hubiera presentado a la valoración psicológica, por lo que, de decretarse un régimen de convivencia atentaría contra el interés superior de la niña, podría afectar su sano desarrollo integral, ante la ausencia de interés por parte del demandado en convivir con ella, además de que no se ha encargado de su cuidado, ni tampoco ha mantenido una conducta que sirva de buen ejemplo a su hija, por todo lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 439 del Código Civil vigente del Estado, en aras de

salvaguardar el interés superior de la niña *****, no se fija régimen de convivencia alguno en la presente resolución.

Sin demérito de lo anterior, se ordena requerir a *****, para que respete el derecho de su nieta de convivir con su progenitor, procurando el acercamiento de ***** con su padre, facilitando los medios necesarios para que la misma se realice en forma efectiva; asimismo se le conmina a evitar fricciones y cualquier cosa que altere el orden y la armonía que debe prevalecer y se abstenga de realizar comentarios que denosten a *****, así como a la familia extensa de este, con el objeto de no alterar el sano desarrollo físico, emocional y psicosexual de la niña *****.

Bajo apercibimiento que de incumplir con lo anterior, le serán aplicadas las sanciones correspondientes, independientemente de la suspensión que corresponda de la guarda, custodia o convivencia con su nieta, con fundamento en los artículos 4° y 133° Constitucional, 1, 3, 5, 9 apartado 3 de la Convención de los Derechos de los niños, 1, 2, 6, 7, 13, 23, 24, 46 y 47 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes y 186 párrafo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

XI. Medidas adicionales

No obstante a lo anterior, no puede pasarse por alto por esta autoridad que se detectó por parte de la especialista en psicología



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

adscrita a la Procuraduría de la Protección de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia identificó en ***** y ***** una contaminación de emociones respecto a la muerte de ***** (madre de la niña e hija de la actora).

Consecuentemente, al ser obligación de esta juzgadora intervenir de oficio en los asuntos donde se encuentran inmersos los derechos e intereses de personas menores de edad, previsto en los artículos 4 y 133 Constitucional; 1, 3, 5 y 9 de la Convención de los Derechos del Niño; 2, 3, 6 y 18 de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, se determina que ***** y la niña ***** deberán someterse a un proceso psicológico que les ayude a llevar un proceso de duelo sano, en cuanto a la muerte de la madre de la infante, para lo cual **una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérasele** al Centro de Salud Mental “Agua Clara”, dependiente del **Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes** para que dentro de un plazo que no exceda de tres días informe el día, lugar y fecha en que dará inicio el proceso aludido, así como el especialista que llevará a cabo el mismo, bajo apercibimiento **que de no dar cumplimiento a ello, se le impondrá, como medida de apremio, una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización**, en términos del artículo

26 apartado B párrafo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 60 fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente la vía única civil instada por *****.

SEGUNDO. Esta juzgadora es competente para conocer de la demandada de pérdida de patria potestad propuesta por *****.

TERCERO. ***** dio contestación a la demanda interpuesta en su contra y no justificó sus excepciones.

CUARTO Es **fundada** la acción de pérdida de patria potestad ejercida por ***** en contra de *****.

QUINTO. Se **condena** a ***** a la pérdida de la patria potestad que detentaba sobre su hija *****, y se determina que en lo subsecuente corresponderá en forma exclusiva a ***** el ejercicio de la patria potestad de dicha infante.

SEXTO. Se determina que la guarda y custodia definitiva de la niña ***** quedará a cargo de su abuela materna *****.

SÉPTIMO. Se reconoce el derecho de convivencia de la niña ***** con su progenitor, sin que en se establezca régimen alguno



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

en la presente resolución, por los razonamientos vertidos en la parte considerativa de la presente.

OCTAVO. Se determina que ***** y la niña ***** deberán someterse a un proceso psicológico en los términos decretados en la parte considerativa de la presente resolución.

NOVENO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, requiérasele al Centro de Salud Mental “Agua Clara”, dependiente del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes en los términos y con los apercibimientos decretados en esta resolución.

DÉCIMO. Se hace saber a las partes que al hacerse pública la presente sentencia, se suprimirá la información clasificada como confidencial, de conformidad a lo que establecen los artículos 1º, 11, 55 fracción XXXVI, 58 y 70 inciso B fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente.

A S I, lo sentenció y firma **Janett Romo Zaragoza**, Jueza del Juzgado Primero Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, ante **Rommy Yolareli Muñiz Rodríguez**, Secretaria de Acuerdos interina que autoriza. Doy fe.

JANETT ROMO ZARAGOZA

Jueza Primero Familiar en el Estado

La resolución que antecede se publica en Lista de Acuerdos de fecha **uno de febrero de dos mil veintitrés**, lo que hace constar **Rommy Yolareli Muñiz Rodríguez**, Secretaria de Acuerdos interina de este Juzgado. Conste.

*Dspa**

La Licenciada Rommy Yolareli Muñiz Rodríguez, Secretaria de Acuerdos y/o de Estudio y Proyectos adscrita al Órgano Jurisdiccional, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia o resolución 0216/2019 dictada en treinta y uno de enero del dos mil veintitres por el Juez Primero de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, conste de ochenta fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprimió: nombre de las partes, representantes legales, domicilios y demás datos generales, seguir el listado de datos suprimidos, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Aguascalientes, Aguascalientes, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.

V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del expediente número **1340/2021**, relativo al **procedimiento especial de pérdida de patria potestad** promovido por la maestra en derecho **ZULEMA GONZÁLEZ REYNA**, Procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, en contra de ***** , misma que hoy se dicta, y;

C O N S I D E R A N D O:

I.- El artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señala que:

“Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandada, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieran sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos

Cuando el juicio se siga en rebeldía, deberán verificar de oficio, la existencia de los elementos para la procedencia de la acción”.

II.- La maestra en derecho ZULEMA GONZÁLEZ REYNA, Procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado -personalidad que acredita con las copias certificadas por la licenciada KARLA YAZMÍN ESPARZA LAZALDE, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, de la sesión en la que se aprueba su nombramiento, lo que es un hecho público y conocido para esta juzgadora, el cual se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles del Estado [de la foja 11 a la 17]-, documento cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo

dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, **demanda** a ***** , por la pérdida de la patria potestad que ejerce respecto de la menor de edad ***** , fundada en las causales previstas por el artículo 466 fracciones III, IV y V del Código Civil del Estado, para que se decrete la guarda y custodia definitiva de la infante a favor de la mencionada dependencia pública así como por la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad que pudiera ejercer ***** respecto de la niña *****; *argumenta* en esencia **que la demandada ha ubicado a su hija menor de edad, en situaciones de riesgo para su integridad física y psicológica, abandono e incumplimiento de deberes, y malas costumbres, así como desinterés hacia la infante y omisión de sus obligaciones de madre**, sin que se encontrara alguna red familiar idónea, para efecto de que la menor de edad pudiera ser reunificada con su núcleo familiar.

III.- La demandada ***** , no obstante que fue debidamente emplazada a juicio, mediante la publicación de edictos, conforme al artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, según consta de la foja ciento cinco a la ciento once de los autos, **no** dio contestación a la demanda instada en su contra.

IV.- El artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señala lo siguiente:

“El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones”

En esa tesitura, la parte actora para probar los hechos constitutivos de su acción, ofreció como pruebas de su parte las siguientes:

CONFESIONAL, a cargo de *****, quien fue declarada confesa de las posiciones calificadas de legales en audiencia de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, probanza a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 339 y 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al no haber sido destruida en juicio *por el contrario su contenido se robustece con el resto de las pruebas desahogadas en autos-* y tiene eficacia probatoria para tener por demostrado que ***** **reconoce** que está siendo investigada por el delito de tráfico de menores en perjuicio de su menor hija *****; **que vendió a su menor hija *******; que fue omisa en procurar el cuidado de salud de su hija *****; que fue omisa en registrar civilmente a su hija *****; que es omisa en proporcionar comida a su hija *****; que es negligente en el cuidado de su hija *****; que ha sido omisa en cambiar sus condiciones de vida para efectos de recuperar a su hija; que se ha abstenido en seguir las recomendaciones de la Procuraduría de Protección de Derechos, sobre los cambios que debía realizar para recuperar a su menor hija; **que pidió veinticinco mil pesos moneda nacional, a cambio de su hija *******; que se ha abstenido de acudir a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para preguntar sobre su menor hija; **que abandonó a su hija***** bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y**

Adolescentes del Estado; que ha comprometido la salud, seguridad, desarrollo psico-sexual, afectivo, intelectual y seguridad física de su menor hija *****al dejarla abandonada; **que ha abandonado sus deberes de madre respecto de su menor hija ***** y se ha abstenido de ser buen ejemplo;** que sus omisiones han puesto en riesgo a su menor hija*****; que reconoce que quien se ha hecho cargo de todas las necesidades básicas de su hija ***** ha sido la Procuraduría de Protección Local, desde que fue albergada; que dejó en abandono total a su hija *****; y, **que carece de alguna red familiar idónea para apoyarla con su menor hija -lo anterior considerando que la absolvente fue declarada confesa de las posiciones que le fueron formuladas y que previamente se calificaron de legales-.**

TESTIMONIAL, consistente en el dicho de las licenciadas XIMENA DÍAZ DE LEÓN MENDOZA, MIRIAM FABIOLA AVELAR VALDEZ y MARÍA MARTHA MEDINA RUIZ, desahogada en audiencia de fecha quince de febrero de dos mil veintidós y valorada conforme a lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tiene pleno valor probatorio para tener por demostrado que la demandada *****es madre de la menor de edad*****; que la niña ***** se encuentre recibiendo acogimiento residencial en el Centro de Asistencia Social ***** desde el día ***** , porque a su madre *****se le investiga por el delito de tráfico de menores; que la demandada manifestó en la carpeta de investigación que se sigue en su contra, que estuvo buscando en diversas páginas de

internet papás que quisieran adoptar, y en una página llamada ***** contactó a una persona registrada como *****, por lo que *****le preguntó si deseaba adoptar a su bebé y ésta la contestó que sí, que lo harían legalmente, y que le iba a dar veinticinco mil pesos como apoyo para el parto, por lo que *****aceptó que se verían en el baño de ***** , y el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, *****en compañía de su hija ***** y su madre ***** , viajaron a ***** , y la señora que en ese momento identificó a la demandada como ***** , quien le pidió que firmara una hoja que decía “yo cedo los derecho de mi hija para que sea registrada con el nombre de”, pero que en ese momento la demandada se retractó y ***** se apartó y corrió con la niña en brazos, y no le dio a ***** el dinero acordado; **que ***** manifestó ante la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que llegó a la ciudad de ***** , ya que había acordado con ***** dar a su hija en adopción y que habían acordado un apoyo económico–según el dicho de la primera de las atestes-; que después de esa ocasión, la demandada ya no se presentó a preguntar por la situación jurídica de su hija; que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, registró civilmente a la niña ***** , en *****, que las situaciones vividas han afectado a la niña ***** en su desarrollo físico, emocional y cognitivo; que desde**

la puesta a disposición, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del Centro de Acogimiento Residencial “*****”, se ha hecho cargo de cubrir las necesidades básicas de la niña *****, tales como calzado, alimentación, vestimenta, educación, atención médica y psicológica; que la conducta de la demandada, desde que su menor hija, fue puesta bajo resguardo, ha sido de total omisión y abandono de derechos y obligaciones; que la niña ***** no ha tenido ninguna visita; y que la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, buscó redes familiares, pero **no** se encontraron, además de que la abuela materna ***** fue acusada de tráfico de menores; lo anterior considerando que las atestes, quienes son personas idóneas para declarar, ya que laboran en el institución actora, rindieron testimonio en forma coincidente, clara y precisa sobre hechos que les constan por sí mismas y no por referencias o inducciones de terceras personas; además de que su dicho se robustece con las pruebas que serán valoradas en la presente resolución, en términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Sin que al efecto, se conceda valor probatorio al testimonio de MIRIAM FABIOLA AVELAR VALDEZ y MARÍA MARTHA MEDINA RUIZ, en términos de lo dispuesto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para tener por acreditadas las condiciones de higiene en que llegó la menor de edad *****, al momento de la puesta a disposición en la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, pues su

dicho resulta contradictorio, y su declaración no se encuentra robustecida con algún otro medio de prueba, por lo que su testimonio (sobre este punto) no es susceptible de tomarse en cuenta en la presente resolución.

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el atestado expedido por la Dirección del Registro Civil del Estado, relativo al nacimiento de *****, visible a foja diecinueve de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido emitido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se acredita que la demandada *****, es madre de la niña *****, quien nació el *****, siendo registrada el *****, por JAIME DÍAZ ESPARZA, entonces Procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado.

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el legajo de copias certificadas por la maestra en derecho ZULEMA GONZÁLEZ REYNA, Procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, respecto al expediente integrado por la Unidad de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la citada procuraduría, visibles de la foja veinte a la cuarenta y ocho de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 186, 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de las cuales se desprende lo siguiente:

a) Oficio numero ***** de fecha veintisiete de abril del dos mil dieciocho, suscrito por la licenciada FLORINDA ESMERALDA PÉREZ RAMÍREZ, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Justicia Familiar y de Género, con el cual se acredita que en la fecha señalada, se notificó a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, la implementación de la medida de protección decretada para la menor de sexo femenino N N, solicitando su resguardo y el posterior proceso de guarda y custodia correspondiente.

b) Acta mediante la cual se ordena la aplicación de medidas de protección a favor de las víctimas, suscrita por la licenciada FLORINDA ESMERALDA PÉREZ RAMÍREZ Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Justicia Familiar y de Género, de la que se desprende que en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dicha autoridad ordenó la implementación de la medida de protección a favor de la menor de sexo femenino N N, con una vigencia de sesenta días.

c) Oficio número ***** de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por la ING. ERIKA JUDITH AZCONA RAMÍREZ Jefe de Departamento del Centro de Acogimiento Residencial “*****”, con el cual se acredita que **en fecha ***** , ingresó la menor N.N. de dos meses de nacida a dicho Centro.**

d) Comparecencia de ***** , de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, ante la Procuraduría de

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, en el cual manifestó que llegó a ésta ciudad porque acordó con *****que dicha persona adoptaría a su hija; que la contactó por una página de internet llamada *****, **quien le ofreció una cantidad de dinero**; pero en su encuentro en la *****, ***** canceló lo acordado con esa persona, pero ésta le arrebató a la menor y se echó a correr.

e) Oficio número ***** de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el licenciado JAIME DÍAZ ESPARZA Procurador de Protección De Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el cual se acredita que en la fecha señalada, solicitó la colaboración de la Directora del Registro Civil en el Estado, para que llevara a cabo el registro de nacimiento de la niña *****, quien nació el *****.

f) Certificado de nacimiento de fecha catorce de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la doctora MARTHA JOSELINE SOLORZA LUNA Médico Gineco-obstetra de la Secretaría de Salud, con el cual se acredita que en la fecha señalada, ***** dio a luz un producto único nacido vivo de un embarazo, de sexo mujer.

g) Oficio numero ***** de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por el inspector RAFAEL HERMENEGILDO GARCÍA DE LA TORRE, Inspector General de Coordinación del Sistema Acusatorio de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado, con el cual se acredita que en los

registros de dicha comisaría, **no** se encontró registro a nombre de *****.

h) Oficio numero ***** de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por el maestro JUAN ANTONIO ZERMEÑO ROMO Vice fiscal de investigación de delitos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, con el que se acredita que en el sistema de cómputo de dicha vice fiscalía, **no se encontró** registró alguno a nombre de *****.

i) Oficio numero ***** de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito por el licenciado CARLOS ERNESTO ESPAÑA MARTINEZ Director de Justicia Municipal, con el cual se acredita que ***** cuenta con datos de ingreso en el Sistema de Información de Seguridad Pública para el Estado y los Municipios (SISPEM), siendo que en el Historial de Ingreso se señala que en fecha veintitrés de abril del dos mil dieciocho, ***** fue detenida por una falta administrativa, concerniente en agredir física y verbalmente al personal de la guardia.

j) Acta circunstanciada de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, suscrita por la licenciada KARLA YAZMÍN EZPARZA LAZALDE Procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, en la que hace constar que han transcurrido más de treinta días naturales a partir del día veintisiete de abril de dos mil dieciocho, sin que ***** , madre de la niña ***** se haya presentado ante dicha procuraduría, a efecto de convivir y satisfacer las necesidades

básicas de la niña en comento, mismas que han sido cubiertas por el Centro de Asistencia Social “*****”.

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, consistente en el informe rendido por el licenciado WEILBERTH ARTURO RANGEL ZALDÍVAR, Encargado de Despacho de la Dirección de Juzgados Cívicos del Municipio de Aguascalientes, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, visible a foja ciento treinta y cuatro de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se acredita que en el Sistema de Información de Seguridad Pública para el Estado y los Municipios (SISPEM), **no** se encontraron registros de detención o ingresos a nombre de *****.

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, consistente en el informe rendido por el licenciado JUAN MURO DÍAZ, Comisario General de la Policía de Investigación del Estado, de fecha once de octubre de dos mil veintiuno, visible a foja ciento treinta y seis de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se acredita que **no** se encontró registro de detención o ingresos dentro de dicha corporación a nombre de *****.

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, consistente en el informe rendido por el maestro JESÚS FIGUEROA ORTEGA, Fiscal

General del Estado, de fecha tres de enero de dos mil veintidós, quien remite el oficio ***** , suscrito por la licenciada KARINA VALERIA PLASCENCIA SANTOYO, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, visible de la foja ciento treinta y ocho a la cuatrocientos treinta de los autos, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, con el cual se acredita lo siguiente:

- Que dentro la Carpeta de Investigación ***** se sigue en contra de ***** y ***** , por el ilícito de **tráfico de menores**, y como víctimas la recién nacida N N.
- Que ***** manifestó dentro de la carpeta de investigación mencionada, ante la licenciada FLORINDA ESMERALDA PÉREZ RAMÍREZ, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, que estuvo buscando en diversas páginas de internet papás que quisieran adoptar, y en una página llamada ***** contactó a una persona registrada como ***** , por lo que ***** le preguntó si quería adoptar un bebé y ésta la contestó que sí, que iba a ser todo legal y que le iba a dar un apoyo en dinero por la cantidad de veinticinco mil pesos, siendo que ***** le dijo que sí; luego,

que ***** y aquella persona quedaron de verse en la *****, por lo que el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, ambas personas se vieron en el baño de dicho lugar, siendo que ***** iba acompañada de su hija ***** y su madre *****, entonces la señora “*****” en ese momento le enseñó a ***** un papel y le pidió que lo firmara, en el que decía “yo _____, de edad _____, cedo los derechos de la bebé, para que pueda registrarla con su nombre la ciudadana *****”, y su esposo *****, firma y testigo”, que ***** escribió su nombre y su firma en dicho documento, pero luego se arrepintió y le pidió a ***** que le regresara los papeles, entonces que dicha persona se apartó y corrió y se llevó a la bebé, y no le dio el dinero.

- Que en fecha veintidós de abril de dos mil dieciocho, ***** *-madre de la demandada-*, fue entrevistada dentro de la citada carpeta de investigación, en la cual manifestó que su hija ***** tuvo una hija a la cual no registró porque quería darla en adopción; que ella sabía que ***** contactó a una persona en internet para dar a su hija en adopción, siendo que ***** estuvo en contacto con dicha persona, quien le dijo que ***** le pidió dinero; que acompañó a su hija ***** a

Aguascalientes a fin de encontrarse con la persona que contactó su hija, y hasta ese momento supo que la señora se llamaba ***** y que esa señora le arrebató la bebé a ***** y se fue caminando rápido y no les dio el dinero.

- Que en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se determinó el cambio de situación jurídica de ***** a quien se le determinó el carácter de imputada, y se le aplicó un criterio de oportunidad, cuyo efecto se encuentra suspendido.
- Que en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la licenciada FLORINDA ESMERALDA PÉREZ RAMÍREZ, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, ordenó la aplicación de **medida de protección** en favor de la menor de edad de sexo femenino N N, por una vigencia de sesenta días.

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, advirtiendo en este juicio, existe a favor de la menor de edad ***** la presunción legal derivada de los artículos 325 y 436 del Código Civil del Estado, en el sentido de que su madre, tiene la obligación de proporcionar alimentos, cuidados, educación y de observar una conducta que sirva a ésta de buen ejemplo.

V.- Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 2

fracción II, 6 fracción VII, 13 fracción XV, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado y 242 BIS del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **en audiencia de fecha quince de marzo de dos mil veintidós**, con asistencia de la licenciada CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ ESPINOZA psicóloga adscrita al Centro de Psicología del Poder Judicial del Estado, así como del licenciado MARIO ALFREDO LÓPEZ MANZANO tutor especial nombrado en autos *–en sustitución de la licenciada BRENDA MARIBEL AVELAR CONTRERAS–* y la licenciada ANA LOURDES LÓPEZ FRANCO Agente del Ministerio Público de la adscripción, **en aras de ponderar su derecho a la participación**, se escuchó la opinión de la menor de edad*****, *quien manifestó lo siguiente:

*“Me llamo *****, mi mamá me compró mis zapatos, ella está afuera, yo tengo un año de edad, sin embargo con su mano refiere tener tres años, yo vivo en la casa, en la casa vive mi mamá y mi papá, también mi hermano pero él está más chiquito, mi mamá me peinó, mi papá me compró los chicles, yo sola me lavo mis dientes, yo juego con las peinetas, yo juego con mi hermano *****, mi papá también se llama igual que mi hermano, mi papá también juega conmigo, a mi no me gusta jugar fut bol, no me gusta colorear, yo sola me doy de comer, yo hoy comí huevo, mi mamá fue quien lo preparó, estoy en donde está otra niña, mi mamá me compró mi moño, yo quiero a mi mamá y a mi papá mucho, si me gusta vivir con mis papás.”*

En ese sentido, la licenciada CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ ESPINOZA psicóloga adscrita al Centro de Psicología del Poder Judicial del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 242 BIS del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emitió dictamen acerca de la libertad y confiabilidad de la opinión de la menor de edad, concluyendo lo siguiente:

*“..La menor de edad ***** se encuentra ubicada en persona y no lo está en espacio y tiempo, lo cual es acorde a la etapa de desarrollo que se encuentra viviendo. Su conciencia es lúcida, sus periodos de atención son adecuados, su*

pensamiento es parcialmente coherente, toda vez que por su edad aún muestra dificultad en articulación de fonemas, situación que hizo difícil en ciertos momentos la comprensión de su dicho. Así mismo muestra tener una memoria conservada y no parece tener alteraciones perceptuales. Cuenta con un lenguaje tanto expresivo como receptivo adecuado a su edad, identificándose como se mencionó algunas dificultades normales, pues se encuentra en desarrollo su lenguaje. Tiene un buen nivel de socialización, a pesar de que se mostró un poco tímida y con dificultad para permanecer sola con las personas aquí presentes, hecho que de igual manera es esperado para su edad. De la misma manera se advierte que cuenta con el nivel de coordinación motriz tanto fina como gruesa esperada para su edad.

*Con base en lo anterior, dictamino que la menor de edad ***** cuenta con el nivel de desarrollo esperado para su edad cronológica, el cual resulta insuficiente para que comprenda las prestaciones del trámite realizado, sin embargo expresa de forma libre su opinión en cuanto a su situación de vida.*

Del discurso de la niña se puede advertir que actualmente sus necesidades tanto físicas como afectivas se encuentran satisfechas en donde se encuentra, lugar en donde al parecer se relaciona de forma positiva con las personas que habitan el mismo lugar, observándose de igual manera que se encuentra recibiendo un trato adecuado, así como la estimulación necesaria que permita un sano desarrollo.

*Por lo anterior y en aras de que la menor de edad ***** pueda gozar de un sano desarrollo emocional y psicosexual, atendiendo al derecho de todo niño, niña y adolescente de poder vivir en familia **se considera benéfico para la misma se lleve a cabo el trámite que se pretende, y pueda en el lugar que actualmente habita seguir recibiendo los cuidados y atenciones que favorecen su desarrollo integral.***

Dictamen pericial con pleno valor probatorio en términos del artículo 300 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al haber expresado la profesionista los estudios realizados y conocimientos prácticos que tiene en relación a la materia objeto del dictamen, los elementos que tomó en cuenta, así como los procedimientos científicos o analíticos efectuados y que permitieron dar respuesta a las cuestiones puestas a su consideración, así como los motivos y razones de sus conclusiones.

Por su parte, los licenciados MARIO ALFREDO LÓPEZ MANZANO tutor especial nombrado en autos y ANA LOURDES LÓPEZ

FRANCO Agente del Ministerio Público de la adscripción, al emitir opinión conforme a lo señalado por el artículo 242 BIS de la ley adjetiva civil del Estado, manifestaron que debe declararse **procedente** la acción de pérdida de patria potestad instada por la institución actora respecto de la menor de edad *****

VI.- El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:

“...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez...”

Por su parte, la Convención sobre Los Derechos del Niño, de la cual México, es parte integrante adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año, en sus artículos 9 y 12 expresamente establecen:

“Artículo 9.1. *Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.”*

“Artículo 12. *Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al*

niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”

A su vez, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, dispone que se debe garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección, promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros, de los siguientes:

“Artículo 6. *Los principios rectores de los derechos de niñas, niños y adolescentes, son los siguientes:...*

VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;...

XIII. El acceso a una vida libre de violencia;...

Artículo 13. *Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:*

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo...

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia...

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal...

Artículo 22. *Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. Siempre que sea posible, deberán, crecer bajo la responsabilidad y el cuidado de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto, seguridad y en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, ético y social.*

La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni será causa para la pérdida de la patria potestad.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia...

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo...

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no sufrir violencia en el ámbito digital. Tanto las autoridades como quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia o bien, quienes, sin tener dicho carácter, los tengan bajo su cuidado, deberán tomar acciones para detectar y atender en forma integral aquellos casos en que se utilicen las tecnologías de la información y comunicación para amenazar, acosar, agredir o vulnerar la dignidad, intimidad, libertad, desarrollo psicosexual y vida privada de niñas, niños y adolescentes.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza positiva de la madre, el padre, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia o de cualquier otra persona que los tenga a su cuidado, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, estos puedan hacer uso del castigo corporal y humillante.

Artículo 68. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Artículo 96. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables...

III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo;

IV. *Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos, atendiendo al interés superior;*

V. *Asegurar y ofrecer un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno y armonioso desarrollo integral a través de una crianza positiva, mediante el cuidado cariñoso, los vínculos filiales sanos, las relaciones no violentas, respetuosas, positivas y participativas, conforme al grado de madurez y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, que garantice el ejercicio de sus derechos conforme a la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;*

VI. *Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral;*

VII. *Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, castigo corporal o humillante, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación;*

VIII. *Observar la prohibición de aplicar castigos corporales, tratos humillantes o degradantes como formas de corrección disciplinaria, de todo atentado contra la integridad física, psicológica o todo acto que menoscabe su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción;*

IX. *Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia;*

X. *Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;*

XI. *Educar y supervisar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación;*

XII. *Es obligación primordial orientar y supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos para que no afecten el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de los derechos que esta Ley y otros ordenamientos les confiere, siempre que se atienda al interés superior de la niñez...”*

Por su parte, los artículos 434, 436, 445 y 466 fracciones III, IV y V del Código Civil del Estado -vigente al momento de la interposición del juicio-, señalan:

“Artículo 434. *En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición.*

Quien ejerce la patria potestad, debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con el otro ascendiente, en consecuencia, cada uno de los ascendientes deberá evitar cualquier acto de alienación parental.

Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su menor hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a obtener la denigración exagerada y/o injustificada del otro progenitor para producir en el menor, rechazo, rencor, odio o desprecio hacia éste.

Artículo 436. La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las leyes aplicables.

Artículo 445. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlos convenientemente.

Cuando llegue a conocimiento de la autoridad administrativa competente, que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda.

Artículo 466. La patria potestad se pierde por resolución judicial:...

III.- Por malos tratamientos, abandono sin causa justificada de sus deberes de cuidado, alimentarios y en general aquellos inherentes a la patria potestad, o cuando por comprometer la salud, la seguridad o el desarrollo psicológico, sexual, afectivo, intelectual o físico de los hijos, aun cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la normatividad penal;

IV.- Por la exposición que el que la ejerce hiciere del menor de edad o porque lo deje abandonado por más de treinta días naturales aunque lo haya confiado a una institución pública o privada de asistencia social...

V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor sobre quien ejerce la patria potestad..."

De esta manera, primeramente se puntualiza que en procedimientos sobre pérdida de patria potestad, válidamente se puede suplir la deficiencia de la demanda de la parte actora en beneficio única y exclusivamente de niñas, niños y adolescentes

Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 191-2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y siete, del Tomo

XXIII, correspondiente a mayo de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los jueces y magistrados federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el período de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando este de por medio directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.”

En estos términos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 Constitucional, es pertinente precisar que esta autoridad está obligada a resolver el presente litigio, considerando el **interés superior** de la menor de edad *****,* que deriva de la naturaleza del derecho de familia, el cual se ocupa, entre otros aspectos, de la protección de la niñez, a través del ejercicio de la patria potestad, la que es considerada como una institución protectora de la persona y

bienes de menores de edad, que nace de la filiación, procurando establecer las medidas necesarias y suficientes a fin de salvaguardar su interés superior, como bien jurídico tutelado por la norma y, por lo tanto, determinar lo más benéfico para ellos, con base en las pruebas desahogadas en autos.

Así las cosas, esta autoridad procede al análisis y valoración de las causales que de pérdida de patria potestad fueran invocadas por la parte actora en su demanda, precisando que en el presente juicio, se actualizan únicamente las fracciones III y IV del artículo 466 del Código Civil del Estado, que es, cuando por **MALOS TRATAMIENTOS, ABANDONO SIN CAUSA JUSTIFICADA DE DEBERES DE CUIDADO, ALIMENTARIOS y en GENERAL AQUELLOS INHERENTES A LA PATRIA POTESTAD, o cuando por comprometer la salud, la seguridad o el desarrollo psicológico, sexual, afectivo, intelectual o físico de los hijos, aun cuando estos hechos no cayeren bajo la sanción de la normatividad penal; y por la EXPOSICIÓN que el que la ejerce hiciere de los menores de edad, o porque los deje abandonado por más de treinta días naturales aunque lo haya confiado a una institución pública o privada.**

En tal sentido, una vez valoradas todas y cada una de las pruebas aportadas en autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, esta juzgadora considera que si se justifica plenamente que la demandada *****, ha incumplido en forma total con los deberes derivados del ejercicio de la patria potestad respecto de la menor de

edad *****,*y a que se refieren los artículos 325, 445 y 446 del Código Civil del Estado, demostrando un total desinterés para proveer la subsistencia, cuidado y educación de su hija, pues como se ha visto, con las pruebas valoradas en la presente resolución, **se acreditó que ***** , ha ubicado a su hija *****,*en situaciones graves de riesgo y descuido, malos tratos, abandono de deberes, así como desinterés hacia la infante y omisión de sus obligaciones de madre,** lo que evidencia el riesgo real en que se encontraba la infante mencionada.

Lo anterior es así, pues la menor de edad ***** , **fue expuesta** a descuidos por parte de su madre *-pues intentó darla en adopción a cambio de una cantidad monetaria-*, lo que ocasionó que se pusiera en riesgo y se comprometiera la salud, seguridad, desarrollo psicológico, efectivo, intelectual y físico de la menor de edad ***** , aunado a que la niña no estaba registrada civilmente, **violando sus derechos a la identidad y salud, así como a vivir en familia y a una vida digna y libre de violencia,** previstos por los artículos 1, 3 y 4 constitucionales, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 24 y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 43, 44, 46, 50, 57 y 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado.

Ahora, desde que la menor de edad *****,*se encuentra bajo **resguardo** de la institución actora, esto desde el tres de mayo de dos mil dieciocho, según las pruebas aportadas en autos, en términos de lo dispuesto por el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **la demandada ***** no ha**

buscado a la menor de edad ni ha mostrados deseos en recuperar a su hija, lo que evidencia los actos de abandono de que ha sido objeto la menor de edad por parte de su madre, así como la falta de interés y amor hacía la menor de edad *****,*quien además tampoco dio contestación a la demanda entablada en su contra, no obstante que fue debidamente emplazada a juicio.

Luego, ante tales circunstancias, se actualizan las hipótesis previstas en las fracciones III y IV del artículo 466 del Código Civil del Estado, ya que las conductas de acción (puesta en peligro de la menor de edad, pues su madre pretendió “darla en adopción” a cambio de una cantidad monetaria) y omisión (no registrar civilmente a su hija), así como el incumplimiento de deberes y obligaciones que impone la patria potestad a la demandada ***** , **ha implicado que la salud de la menor de edad ***** ,*física y principalmente psicoemocional se encuentre en riesgo**, pues además de que ha carecido, por parte de su madre, de los cuidados y asistencia que requiere todo infante para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, **ha sido la demandada quien la ha ubicado en situación de riesgo, al existir descuido y abandono en su contra**, siendo que la infante ***** se encuentra imposibilitada para valerse por sí misma, a fin de satisfacer sus necesidades primarias, pues actualmente solo cuenta con **tres años de edad**

Por lo tanto, es evidente que ante la conducta, abandono e incumplimiento de deberes en que ha incurrido la demandada ***** , ha puesto en **riesgo real** la salud física,

emocional (principalmente) y la seguridad de su hija, ya que es de todos conocido que los infantes, por su edad, requieren de atención médica especializada constante por ser más vulnerables a las enfermedades, representando tal situación un gasto tanto en médicos como en medicamentos; de igual forma, por su edad, requieren de comida especial y cuidados, ya que debido a su crecimiento, van necesitando continuamente de ropa y calzado; debiéndose también considerar que a los gastos que tales necesidades generan, deben sumarse los relativos a sus derechos de vivienda y educación, que se van incrementando conforme van creciendo, y en este caso los de *****,*nunca han sido solventados por su madre, **aunado a que se encuentra bajo resguardo de la institución actora, desde el tres de mayo de dos mil dieciocho.**

De esta manera, ante los razonamientos vertidos en la presente resolución y considerando que la patria potestad es una institución de orden público en la que la sociedad está interesada, es indudable que lo primordial es salvaguardar el interés y bienestar de todo menor de edad, **por lo que procede condenar a la demandada ***** , a la pérdida de la patria potestad respecto de la menor de edad *****,*** así como a la pérdida de todos los derechos que por esa figura jurídica correspondían a la demandada.

Lo anterior, tomando en cuenta, además las opiniones vertidas por los licenciados MARIO ALFREDO LÓPEZ MANZANO tutor especial nombrado en autos y ANA LOURDES LOPEZ FRANCO Agente del Ministerio Público de la adscripción, quienes manifestaron **conformidad** con la acción de pérdida de patria potestad reclamada

por la parte actora, y desde luego apoyada esta juzgadora en lo señalado por los artículos 4 Constitucional, 2 fracción III párrafo segundo, 6 fracción I y 80 fracción IV de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado y 186 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **pues en aras de proteger el interés superior de la menor de edad *****,*se considera que lo más benéfico para ella, es que la demandada pierda la patria potestad que actualmente ejerce.**

Además, de acuerdo con el preámbulo y los artículos 3 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, este país se ha obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger el interés superior de la niñez, en especial por lo que se refiere a la obligación de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo, **y la demandada ha ubicado a la menor de edad*****,*en situaciones graves de riesgo y descuido, malas costumbres, abandono de deberes, así como desinterés hacia la infante y omisión de sus obligaciones de madre.**

VII.- Consecuentemente, se declara que la parte actora acreditó los hechos constitutivos de su acción, por lo que es procedente condenar a la demandada *******,*a la pérdida de la patria potestad y custodia de la menor de edad *****,***así como al ejercicio de los derechos inherentes a dichas figuras jurídicas.

Ahora, de conformidad a lo que establece el artículo 437 del Código Civil del Estado y atendiendo al interés superior de la niñez, se

declara que la **Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado** *–por conducto de quien sea su titular-*, tendrá la guarda, custodia y tutela de la menor de edad *****

Lo anterior, sin perder de vista que los sistemas interamericanos y universal de los derechos humanos han establecido directrices sobre el cuidado alternativo de aquellas niñas, niños o adolescentes que se encuentren en los casos de maltrato o descuido de sus padres, destacando que debe considerarse el acogimiento de los menores en desamparo, en primer lugar, en la familia extendida; por tanto de un análisis conjunto de los artículos 11 numeral 2, 17 numeral 1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado con respecto a la separación del infante de sus progenitores, que deben operar los principios de necesidad, excepcionalidad y temporalidad, de modo que la medida especial que implique la ubicación del niño bajo cuidado alternativos esté orientada a la reintegración del niño a su familia de origen, siempre que ello no sea contrario a los intereses de los menores de edad.

Sin embargo, como se desprende de autos, una vez realizadas las investigaciones conducentes en términos de lo dispuesto por los artículos 437 del Código Civil del Estado y 186 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el numeral 120 fracción IV de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del Estado, esta juzgadora tuvo a la institución actora informando y justificando que no se localizó ninguna red familiar idónea para que fuera reunificada la menor de

edad *****, tal y como se advierte del auto dictado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno.

Lo anterior es así, pues de los documentos que integran el expediente número 69/2018 integrado en la Unidad de Protección y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, cuyo valor probatorio es pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 281 y 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, **se desprende** que respecto a ***** *-abuela de la menor de edad-* y ***** *-bisabuelo paterno de la menor de edad-*, se desconoce su domicilio actual, aunado a que ***** sabía del trámite de “adopción” y beneficio económico que con ello obtendría su hija ***** , por lo que no se consideran redes viables o idóneas para el cuidado de la menor de edad ***** , y respecto a ***** *-hermano de la niña *****-*, es menor de edad, por lo que tampoco se considera red viable o idónea para el cuidado de la niña ***** *-todo lo anterior, se acredita con las pruebas valoradas en la presente resolución-*, **por lo que no constituyen redes aptas e idóneas para el cuidado de la menor de edad *******, *en términos de lo dispuesto por los artículos 4 Constitucional, 9 y 10 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 22 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado y 186 del Código de Procedimientos Civiles del Estado [disposiciones legales que reconocen el derecho de la menor de edad a vivir en familia, por lo cual la custodia

institucionalizada debe ser la última opción, pues de lo contrario se les priva de la oportunidad de tener una familia propia].

VIII.- Por otra parte, considerando que ***** , fue condenada a la pérdida de la patria potestad de la menor de edad ***** , ello trae como consecuencia, que no tenga derechos, esto es, pierde todo privilegio directivo a exigir la obediencia de la infante, **la convivencia con ésta**, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes, decidir, participar y opinar sobre aspectos inherentes a la educación, principalmente, conservación, asistencia, formación y demás relativas a los aspectos no patrimoniales de quienes ejercen la patria potestad.

Ahora, con independencia de las consecuencias apuntadas que van directamente relacionadas con los derechos que otorga el ejercicio de la figura de la patria potestad a los progenitores, si bien de ellos no se aprecia que con la pérdida de la patria potestad indefectiblemente se pierda el derecho de convivencia, ya que éste no es exclusivo del que ejerce la patria potestad, pues también lo es de la menor de edad, quien de conformidad con lo que establece el artículo 4° Constitucional, tiene derecho a que se propicien las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con los progenitores; pero para determinar sobre la existencia de un régimen de convivencia o no, habrá de atenderse la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad, y dicho régimen en este caso, debe quedar sujeto a las condiciones y necesidades de la menor de edad y no a la exigencia de la demandada.

Luego, si de las pruebas valoradas en la presente resolución, se desprende que la menor de edad *****, **fue objeto de descuido, malas costumbres y abandono de deberes**, por parte de *****, lo que hace evidente el **riesgo real** que representa la demandada hacia la menor de edad mencionada, así como su falta de interés y amor, **resulta improcedente la fijación de cualquier régimen de convivencia**

A la anterior consideración, sirve de apoyo legal, por su argumento rector, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha nueve de septiembre de dos mil nueve, al resolver la contradicción de tesis número 123/2009 entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia del Séptimo Circuito, que es del rubro siguiente:

“PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES. Una de las consecuencias de la pérdida de la patria potestad es que el progenitor condenado no tenga derechos respecto de sus hijos, es decir, la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, independientemente de las consecuencias apuntadas -que se relacionan directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la patria potestad-, de ello no se aprecia que su pérdida conlleve indefectiblemente que deba impedirse al menor ejercer el derecho de convivencia con sus progenitores en tanto que, por un lado, ese derecho no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos y, por el otro, no todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad. En ese orden de ideas resulta indispensable atender al interés superior del menor, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos

implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél; de ahí que el juez de lo familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia

IX.- Por otro lado, a efecto de dar cabal cumplimiento al principio de exhaustividad que debe regir toda resolución judicial, previsto por el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se precisa que la institución actora en contravención a lo dispuesto por el artículo 235 de la ley citada, **no** acreditó la causal prevista por el numeral 466 fracción V del Código Civil del Estado, en la cual se establece que la patria potestad se pierde cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor sobre quien ejerce la patria potestad.

Lo anterior, considerando que con las pruebas valoradas en la presente resolución, **no** se justifica que ***** haya sido condenada por la comisión de un delito doloso, en agravio de su hija menor de edad *****, pues del informe rendido por el maestro JESÚS FIGUEROA ORTEGA, Fiscal General del Estado, se desprende que ***** tiene el carácter de imputada y que en fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se le aplicó un criterio de oportunidad, sin que lo anterior implique la existencia de una condena en su contra, aunado a que el efecto de dicho criterio de oportunidad se encuentra suspendido; por lo que **no** se actualiza la

causal de pérdida de patria potestad, prevista por el artículo 466 fracción V del Código Civil del Estado.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 325, 330, 434, 437 y 466 del Código Civil, y en los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 129, 235, 248, 337, 338, 341, 346, 348, 349 y 352 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara que la parte actora **Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado**, por conducto de la maestra en derecho **ZULEMA GONZÁLEZ REYNA**, acreditó la acción de pérdida de patria potestad.

SEGUNDO.- La demandada ***** , no dio contestación a la demanda instada en su contra.

TERCERO.- Se condena a la demandada ***** a la pérdida de la patria potestad y custodia, respecto de la menor de edad ***** , así como al ejercicio de los derechos inherentes a dichas figuras jurídicas.

CUARTO.- Se declara que la **Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado** *-por conducto de quien sea su titular-*, tendrá la guarda, custodia y tutela de la menor de edad *****

QUINTO.- Se declara improcedente la fijación de cualquier régimen de convivencia entre la demandada y la menor de edad *****

SEXTO.- En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto de dos mil veinte, **se ordena se**

proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia, siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente.

A S I, lo sentenció y firma la licenciada **VERÓNICA ZARAGOZA RAMÍREZ**, Jueza Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, ante la licenciada **LAURA ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ**, Secretaria de Acuerdos que autoriza.- Doy fe.

La presente resolución se publica en lista de acuerdos de fecha uno de abril de dos mil veintidós, lo que hace constar la licenciada **LAURA ALEJANDRA SALAZAR VÁZQUEZ**, Secretaria de Acuerdos de este juzgado.- Conste.

*lasv

La Licenciada Laura Alejandra Salazar Vázquez Secretaria de Acuerdos y/o de Estudio y Proyectos adscrita al Órgano Jurisdiccional, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia o resolución 1340/2021 dictada en treinta y uno de marzo del dos mil veintidós por la Juez Quinto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, conste de treinta y cuatro fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprimió: nombre de las partes, representantes legales, domicilios y demás datos generales, seguir el listado de datos suprimidos, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.



SENTENCIA DEFINITIVA

(Adopción)

Aguascalientes, Aguascalientes, diez de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO para dictar sentencia definitiva el expediente número **1898/2022**, relativo a Diligencias de Jurisdicción Voluntaria que sobre **adopción plena** promovió *****,*con el consentimiento de la señora ***** , y;

CONSIDERANDO:

I. COMPETENCIA

Esta autoridad es competente para conocer de las diligencias de Jurisdicción Voluntaria, porque el promovente tiene su domicilio en el Primer Partido Judicial del Estado, lo anterior de acuerdo con el numeral 142, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles en vigor.

Además de la territorialidad, esta autoridad sostiene competencia por razón de materia y grado, de acuerdo con los numerales 2º, 35, 38 y 40 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

II. OBJETO DE LAS DILIGENCIAS

***** solicitó la adopción plena del adolescente ***** (*en lo subsecuente de identidad reservada* *****), con manifestación de conformidad expresa por parte de la señora ***** , madre de éste adolescente, cuyo consentimiento se encuentra debidamente ratificado, como consta a foja ochenta y cinco y ochenta y seis de los autos.

Hecho esto, se dictó auto de radicación, ordenándose dar vista a la Agente del Ministerio Público de la adscripción, para que manifestara su conformidad o inconformidad con la adopción que se pretende; e igualmente, se tuvo al demandante exhibiendo la constancia expedida por la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con la cual se acreditó que

***** cumplió satisfactoriamente con el Taller de Adopción, acorde a lo establecido por el artículo 413 fracción V del Código Civil del Estado (foja 17).

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción II, 6 fracción VII, 13 fracción XV, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, así como los artículos 1, 2, 3, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 24 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 471, 473, 475 y 484 del Código Civil del Estado, se nombró a la licenciada **Silvia Guadalupe López Alvarado**, como tutriz especial del adolescente de iniciales *****, quien aceptó el cargo (foja 24).

III. VALORACIÓN DE PRUEBAS

De acuerdo con el artículo 858 del Código de Procedimientos Civiles, el que pretenda adoptar a uno o más menores o a uno o más discapacitados deberá acreditar los requisitos establecidos en el artículo 413 del Código Civil.

En el presente caso, el promovente acompañó como fundatorios de la acción intentada:

- 1) El atestado de nacimiento del adolescente de identidad reservada ***** (foja 10);
- 2) Los atestados de nacimiento y de matrimonio del promovente ***** y la madre del menor de edad objeto de ésta resolución, señora ***** (fojas 7 a 9).
- 3) Constancia de haber asistido al Taller de Adopción expedida por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (foja 17);



4) Certificado médico del promovente de estas diligencias (foja 14);

5) Constancia de percepciones expedidas por la institución bancaria *****visibles a fojas 52 y 53 de los autos.

6) Constancia de no antecedentes penales expedida por el licenciado **Jaime Vargas Macías** Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado (foja 13);

7) Copias fotostáticas certificadas visibles a fojas cincuenta y seis a ochenta que corresponden al expediente ***/****, del índice del Juzgado *****, relativas al juicio de Procedimiento Especial que sobre ***** promovió la señora ***** en contra del señor *****, de donde se desprende que, el padre del adolescente de iniciales ***** fue condenado a *****.

Además, en audiencia celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós (fojas 35 a 42), se recibió el testimonio de ***** y *****.

Las pruebas señaladas se valoran en su conjunto, siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 245, 281, 310, 341, 346, 349 y 351 del Código de Procedimientos Civiles, mismas que concatenadas unas con otras, tienen pleno valor probatorio, porque los atestados y constancias exhibidas, son documentos expedidos por una autoridad y por lo tanto, prueban la veracidad de su contenido.

Adicional a ello, se encuentran corroborados con el dicho de los testigos, y éstos merecen credibilidad pues por su edad, capacidad, instrucción, probidad y antecedentes personales, tienen capacidad para juzgar sobre los hechos de los cuales deponen, se trata de testigos presenciales, su dicho fue claro, preciso y coincidente, no fueron obligados a declarar y dieron razón fundada de su dicho.

Como corolario de lo anterior, con base en los medios de convicción anteriormente valorados, se desprende que, en las

presentes diligencias, se han satisfecho los requisitos a que se refiere el artículo 413 del Código Civil del Estado, lo que significa que se acreditaron los siguientes elementos:

a) ***** y*la señora ***** contrajeron matrimonio civil el *****.

b) El promovente y su cónyuge son personas de buenas costumbres, siendo que el primero cuenta con una edad mayor a quince años que la que tiene el adolescente que se pretende adoptar.

c) *****es una persona solvente, puesto que tiene medios suficientes para proveer la subsistencia, la educación y el cuidado del adolescente de iniciales *****objeto de éstas diligencias, además, goza de buena salud física, psicológica y afectiva, sin soslayar que el señor ***** y su cónyuge viven en el mismo domicilio con el adolescente aludido y los hijos procreados en común de nombres ***** y ***** de apellidos ***** conformando así un núcleo familiar.

IV. OPINIÓN DEL ADOLESCENTE

En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se garantizó el derecho del adolescente de identidad reservada *****a expresar su opinión en forma libre, la que se recabó en diligencia que tuvo lugar el ocho de septiembre dos mil veintidós, durante la cual manifestó lo siguiente:

“hola, sé que este trámite es para lo del cambio de apellido. Tengo quince años, me está yendo bien en la escuela, estoy en primer grado de preparatoria, me está gustando mucho esta etapa.

*Posteriormente, el Juez procede a explicarle brevemente y de forma general al adolescente en mención, de lo que consta el presente trámite así como las consecuencias de ello, a lo cual el menor de edad responde: me parece bien, yo sabía que estaba la posibilidad de que me cambiaran el apellido y cuando me preguntaron mis papás, yo les dije que me parecía bien esa situación; yo desde que me acuerdo, vivo con mi papá ***** y mi mamá, también tengo hermanos y ellos son de apellidos “*****”.*

Me llevo bien con mi papá, con Israel, por ejemplo en la semana, cuando no le capto a las matemáticas, él me apoya y en los fines de



semana salimos todos en familia y jugamos en las canchas o vamos al parque.

En cuanto a mis papás, yo siempre desde que tengo uso de razón, son entre los dos quienes cubren nuestras necesidades, los dos trabajan; tengo dos hermanos, un hermano que se llama "*****" y una hermana, que se llama "*****", me llevo bien con ellos, pero me llevo mejor con mi hermano.

Mis papás me comentaron que iniciarían el caso y me preguntaron qué me parecía y les dije que estaba de acuerdo, que quería llamarme igual que mis hermanos como "*****", con mi papá, con Israel, siempre he tenido una buena relación.

Me gustaría estudiar ingeniería automotriz."

Hecho esto, la especialista en psicología adscrita al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes dictaminó:

"Que en este acto, de acuerdo a mi leal saber y entender, rindo el dictamen que a mi parte corresponde, cumpliendo en primer lugar con los requisitos establecidos en el artículo 300 del referido Código, de la manera siguiente:

A) Respecto de este inciso tengo licenciatura en psicología humanista egresada de la Universidad***** con título reconocido ante la Secretaría de Educación Pública, así como Maestría en Educación Familiar por la Universidad ***** de igual manera cuento con Diplomado en Atención a Víctimas del Delito y Agresores y Diplomado en Psicología Forense; además de tener conocimiento y experiencia en intervención en crisis, detección y atención de violencia en adultos y menores, así como también experiencia en el abordaje terapéutico a adultos, adolescentes, niños, niñas.

B) Respecto a este inciso señalo que: me baso en la observación directa de la conducta del adolescente, en la que he tomado en cuenta el desarrollo que ha alcanzado en su lenguaje tanto expresivo como receptivo; con respecto al primero se considera la construcción gramatical que utiliza, el vocabulario con el que cuenta, la fluidez con la que se expresa así como la lógica y coherencia de su dicho; respecto al segundo se toma en cuenta la comprensión que muestra de los planteamientos que se le realizan durante la audiencia, la cual se hace evidente por la congruencia que existe entre lo planteado y las respuestas proporcionadas por el mismo. Se considera además el nivel de socialización que presenta y el grado escolar que cursa como un indicador de su capacidad intelectual.

C) Respecto de este inciso, señalo que el adolescente de identidad reservada ***** se encuentra ubicado en persona, espacio y tiempo, debido a la etapa de desarrollo que vive. Posee conciencia lúcida, periodos de atención adecuados, pensamiento lógico y coherente, su memoria se encuentra conservada y no parece tener alteraciones perceptuales. Cuenta con un lenguaje tanto expresivo como receptivo adecuado a su edad, cursa el grado escolar que le corresponde y tiene un buen nivel de socialización.

Con base en lo anterior dictamino que: el adolescente cuenta con el nivel de desarrollo esperado para su edad cronológica, así como la madurez intelectual que le permite comprender el trámite realizado; siendo que se expresó de forma libre así como refirió sus deseos de tener el apellido del promovente.

De la apariencia y del dicho del adolescente, se desprende que éste fue presentado en buenas condiciones de aliño personal, observándose por su

discurso así como en el lenguaje corporal y apariencia que es bien atendido y son cubiertas sus necesidades básicas por parte de su madre y el promovente ************, a quien el adolescente identifica como su padre. Es evidente que entre el adolescente y el promovente se ha desarrollado una relación como padre e hijo, pues se ha involucrado en su vida desde sus primeros años de vida; de igual manera, se puede distinguir que el adolescente de identidad reservada ***** se encuentra adaptado al entorno familiar que habita al lado del promovente, además de establecer relaciones filiales intensas y que constituyen un recurso afectivo para el mismo, siendo por ello también sus deseos de que no exista diferencia alguna entre él y sus hermanos, y por ende llevar el apellido del promovente.

*Es por ello que con la finalidad de continuar favoreciendo el bienestar integral del referido adolescente, es que se considera benéfico ser adoptado por el señor ************, y continúe gozando del afecto y demás prestaciones que éste pueda brindar.”*

Dictamen que causa convicción en éste juzgador, considerando la calidad profesional de la perito, toda vez que los estudios cursados por éste, la dotan de la capacidad académica para emitir una opinión de esta naturaleza, además que la metodología que utilizó y las conclusiones a las que arribó arrojan a esta autoridad luz de la eficacia de tal dictamen, por las bases científicas con las que cuenta y que justificaron tales conclusiones.

La tutriz especial expresó lo siguiente:

*“...manifiesto mi conformidad con el dictamen emitido por la perito en psicología y una vez que fue escuchado el adolescente de identidad reservada ************, me permito manifestar mi conformidad con las presentes diligencias por ser benéfico para el desarrollo psicológico y personal de mi pupilo.”*

Posteriormente, la Agente del Ministerio Público mediante escrito de dos de febrero de dos mil veintitrés (foja 87), manifestó conformidad con la procedencia de éstas diligencias, pues sostuvo que, las mismas son benéficas para el adolescente, dado que identifica al promovente como su padre, siendo claro el vínculo afectivo hacia él.

Cabe destacar que, mediante escrito glosado a foja setenta de los autos, la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado y Titular de la Secretaría de la Familia, por conducto de la Procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes



manifestó conformidad con la Adopción plena planteada por el demandante de éstas diligencias.

V. DECISIÓN

En las condiciones apuntadas, al haberse acreditado todos y cada uno de los requisitos legales para la procedencia de la acción intentada, **se aprueba la adopción solicitada**, y se determina que, en lo sucesivo el adolescente objeto de esta resolución, se llamará *********, de conformidad con lo previsto por los artículos 433-A y 433-B del Código Civil del Estado, y por tanto se equiparará a hija consanguínea para todos los efectos legales correspondientes, incluyendo los impedimentos del matrimonio.

El adoptante *********, adquiere respecto del adoptado, todos los derechos y obligaciones que tienen los padres consanguíneos respecto de sus hijos.

Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en términos de lo dispuesto por los artículos 78 y 424 del Código Civil, se ordena cancelar el registro de nacimiento del adolescente en cita y extender un nuevo registro, de acuerdo con el capítulo I, título IV, libro primero del Código Civil.

Por expuesto y fundado, **se resuelve:**

PRIMERO. Se aprueba la adopción plena solicitada por *********, con el consentimiento de la señora ********* respecto del adolescente de iniciales *********

SEGUNDO. Se declara que *********, adquiere todos los derechos y obligaciones que tienen los hijos consanguíneos respecto de los padres, declarando que en lo sucesivo se llamará ********* *********.

TERCERO. El adoptante *********, adquiere respecto del adoptado, todos los derechos y obligaciones que tienen los padres consanguíneos respecto de sus hijos.

CUARTO. Notifíquese a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, el contenido de la presente resolución.

QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítase copia certificada a la Directora del Registro Civil del Estado, para que conforme a sus atribuciones, haga la cancelación del registro de nacimiento del adolescente en cita y extender un nuevo registro, de acuerdo con el capítulo I, título IV, libro primero del Código Civil.

SEXTO. En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto de dos mil veinte, se ordena se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente.

ASÍ, lo sentenció y firma **José Tomás Campos Castorena**, Juez Sexto Familiar del Estado, ante **Silvia Mendoza González** Secretaria de Acuerdos que autoriza. Doy fe.

Juez Sexto Familiar del
Primer Partido Judicial del Estado

José Tomás Campos Castorena

Secretaria de Acuerdos
del Juzgado Sexto Familiar

Silvia Mendoza González



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

La presente resolución se publicó en la lista de acuerdos de trece de marzo de dos mil veintitrés, lo que hace constar **Silvia Mendoza González**, Secretaria de Acuerdos de este juzgado.

La Licenciada SILVIA MENDOZA GONZÁLEZ, Secretaria de Acuerdos y/o de Estudio y Proyectos adscrita al Órgano Jurisdiccional, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia o resolución 1898/2022 dictada en diez de marzo del dos mil veintitrés por el Juez Sexto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, conste de cinco fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprimió: el nombre de quien promueve, de la menor de edad involucrada, denominaciones de instituciones universitarias, nombres de testigos, así como datos registrales y/o demás datos generales, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.